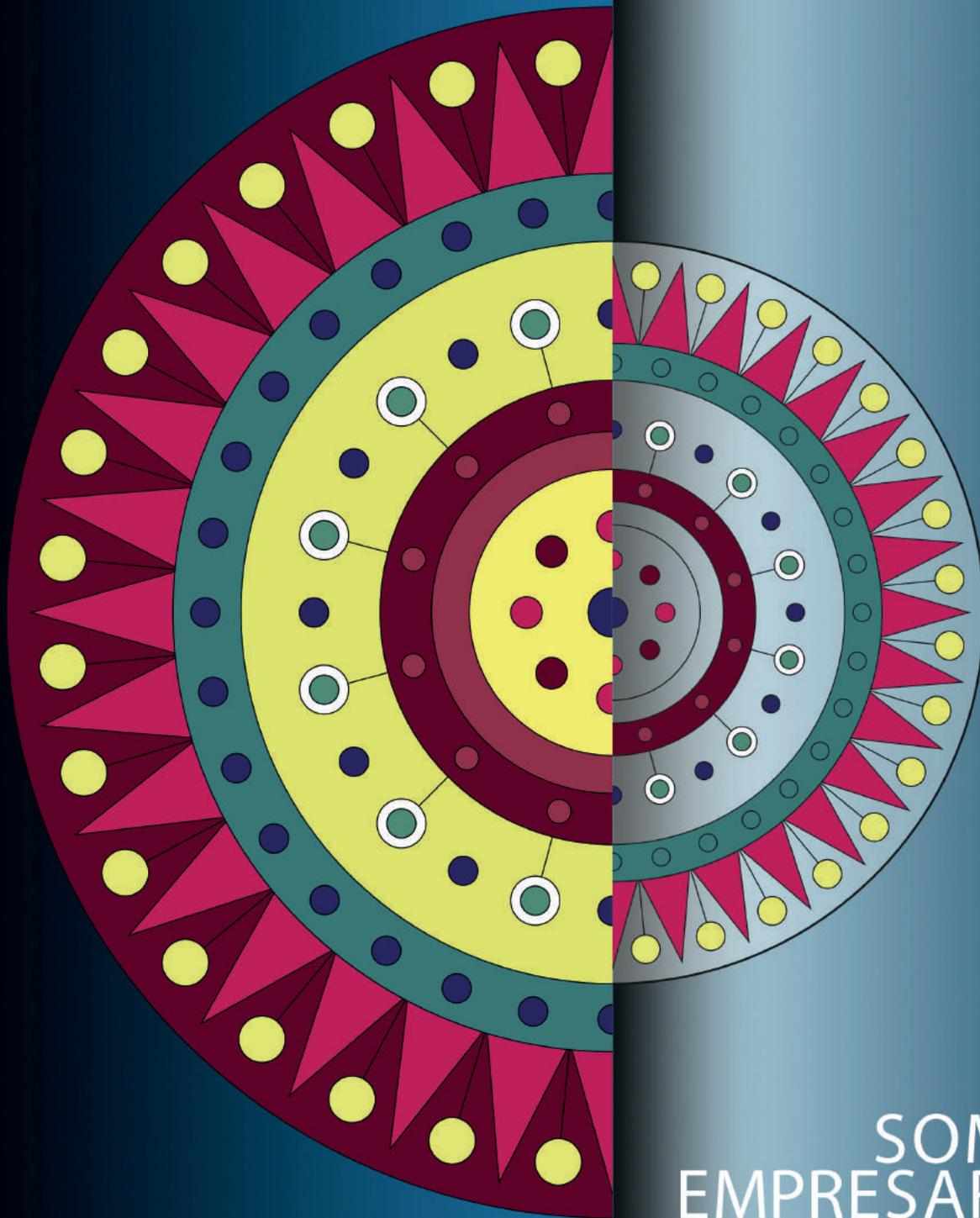


FEDECAMARAS

EL ORGULLO DE SER EMPRESARIO



SOMOS
EMPRESARIOS
SOMOS
FUTURO

RESUMEN EJECUTIVO

Hoy más que nunca, los empresarios estamos comprometidos con Venezuela.

En medio de un día a día signado por la carencia de bienes básicos, la caída acelerada del poder de compra, las fallas en los servicios públicos, y una elevada incertidumbre sobre el conflicto político, persiste la sólida voluntad de un país que quiere recuperarse y crecer. Como empresarios, estamos comprometidos con impulsar nuestro país hacia el desarrollo. Por eso, desde Fedecámaras insistimos en proponer una agenda posible para recuperar la confianza fundamental que necesita nuestra economía.

Venezuela necesita crecer con empresas sostenibles.

El crecimiento económico es una herramienta poderosa para la mejora de las condiciones de vida de la población, y por ello la OIT ha tomado la iniciativa de identificar 17 condiciones que los países de América Latina deben garantizar para el desarrollo de empresas sostenibles. Necesitamos crecer considerando los contextos económico, institucional, social y de medio ambiente. Y en cada uno de esos contextos, Venezuela no tiene por qué seguir quedándose atrás con respecto a la región a la que pertenece. Trazar la ruta hacia la recuperación empieza por conocer cuál es la distancia que hoy nos separa de las metas que tenemos que lograr.

En el contexto económico, destaca que Venezuela tiene el peor desempeño macroeconómico de América Latina, en medio de una profunda recesión, la inflación más alta del mundo, y un marco regulatorio que impone trámites costosos y discrecionales –tantos, que Venezuela es el 4to peor país del mundo para hacer negocios, según el Banco Mundial-. A esto se suman las fallas de infraestructura y el rezago tecnológico.

En el contexto social, el presente de Venezuela está marcado por un doloroso incremento de la pobreza, que es incompatible con el desarrollo de empresas sostenibles. Una población en situación de pobreza tiene más dificultades para desarrollar su talento, y más dificultades para encontrar y crear oportunidades. En el país se deterioran el acceso a la educación y a la salud, mientras se agrava la situación de violencia e inseguridad.

En el contexto político institucional, vale destacar que las instituciones son el pilar fundamental para el desarrollo de empresas sostenibles, y Venezuela se evalúa en mediciones internacionales como el país con el peor desempeño institucional del mundo –según el Foro Económico Mundial-, con serios problemas de corrupción, predominio de influencias indebidas y falta de independencia del poder judicial, entre otros elementos. Promover la inversión necesita un entorno de estabilidad con el que Venezuela no cuenta.

En el contexto medio ambiental, hay que mencionar que las riquezas en recursos naturales de Venezuela no están acompañadas por una orientación que busque la eficiencia en el uso de esos recursos. Para obtener una unidad de producto, Venezuela gasta más energía que el promedio de sus países vecinos.

*Es el momento
de empezar
a cerrar las
brechas.*

Responder efectivamente a los problemas de la población requiere que las normas que rigen la actividad económica se reorienten hacia potenciar el uso de nuestros recursos y nuestro talento como medio para crear bienestar para las familias venezolanas. Eso empieza por recuperar la confianza en nuestras instituciones y crear espacios para la cooperación. Venezuela tiene recursos, talento y sobre todo voluntad para crecer. Es el momento de empezar a cerrar las brechas que nos separan del promedio de América Latina, implementando políticas económicas que permitan definitivamente empezar a recorrer el camino hacia la recuperación y el desarrollo.

*Hay
oportunidades
de acción a la
mano.*

Avanzar hacia la recuperación y el crecimiento necesita una reforma integral y profunda, planes integrales, coordinación y acuerdos entre los diversos actores. En nuestros documentos de Compromiso con Venezuela hemos esbozado un conjunto de reformas que se traduciría en la recuperación de la confianza que necesita nuestra economía para crecer con empresas sostenibles, incluyendo la construcción de reglas claras y justas para la actividad económica; la reducción de la burocracia y la protección del bienestar de los más vulnerables. Más allá de reiterar esos principios, en este documento presentamos 4 casos de acción concretos, como ejemplos de acciones que están a la mano para ser implementados de forma coordinada entre el sector público y privado.

- 1 ¿Por qué exportar es tan difícil en Venezuela?** Venezuela tiene abundantes recursos naturales, talento humano, productos de calidad y una posición geográfica privilegiada. Pero cada vez son menos los productos venezolanos que logran colocarse en anaqueles de otras naciones. Más allá de los obstáculos que enfrentan las actividades económicas en general, exportar es un desafío por el increíble conjunto de trabas que tienen los productores locales para colocar sus productos en el mercado internacional, muchas de las cuales están relacionados directamente con trámites que se pueden simplificar, incluso con apoyo de la iniciativa privada.
- 2 Más capacidades y mejores oportunidades para la fuerza laboral.** El trabajo es el vehículo fundamental mediante el cual las personas pueden participar del crecimiento económico. Por esto es importante asegurarse que los venezolanos puedan incorporarse de forma plena al mercado laboral, y una herramienta clave en este sentido es la formación para el trabajo. Aunque no existe una modalidad única para implementar programas de formación de trabajo, los que funcionan mejor son los programas que vinculan a los actores privados, el gobierno, las universidades, ONG y entidades financieras. En América Latina se han implementado varios programas exitosos siguiendo esquemas de cooperación.
- 3 Alianzas Público-Privadas como oportunidad de mejorar la infraestructura.** Contar con viviendas de calidad, agua corriente, drenajes, vías de comunicación, sistemas de transporte, puertos y aeropuertos, impacta notablemente la vida cotidiana y también la competitividad del país. Venezuela necesita emprender grandes inversiones en infraestructura y el sector público tiene mermada su capacidad tanto por restricciones de recursos como por la enorme demanda en otras áreas de funcionamiento del Estado. Las alianzas público-privadas son una oportunidad para trabajar en equipo en la provisión de la infraestructura que necesitamos. Proyectos como la ampliación del acueducto Luisa Cáceres de Arismendi o el Sistema Vial Expreso Región Lago de Valencia Tramo Sur Perimetral, podrían pasar de proyectos a realidades bajo este esquema.
- 4 ¿Por qué el estado Sucre no es una potencia económica?** Restricciones y oportunidades. El estado Sucre tiene una dotación natural impresionante de bellezas naturales y recursos para actividades económicas como la pesca, la agroindustria, la minería y la energía (gas y petróleo). Además, cuenta con una posición geográfica que le da ventajas para el intercambio comercial con islas del Caribe. Sin embargo, para 2013 (última información oficial disponible) Sucre era el estado con más pobreza del país: 55,2% de las personas estaban por debajo de la línea de pobreza. Factores como la baja productividad, la infraestructura deficiente y la inseguridad, restringen el desarrollo del estado. El trabajo conjunto entre el sector público, privado y las comunidades es fundamental para la identificación de las prioridades de acción en el estado.

HOY MÁS QUE NUNCA, COMPROMETIDOS CON VENEZUELA

Vemos un país que quiere crecer,
aunque esté lleno de dificultades.

deteriorando con cada terreno expropiado que dejó de producir, con cada obra de infraestructura que se dejó inconclusa, y con cada trámite burocrático que trajo como consecuencia que cerrara un comercio y se perdieran empleos. Según ENCOVI¹, 81,8% de los venezolanos viven en situación de pobreza, es decir que no tienen suficientes ingresos para satisfacer sus necesidades básicas. A las graves dificultades económicas se suma una delicada situación social, en la que preocupa sobre todo la violencia, y se suma además una elevada incertidumbre sobre el conflicto político. Pero a pesar de los problemas, persiste un país dispuesto a recuperarse y a crecer.

El día a día de los venezolanos está signado por la carencia de bienes básicos, la caída acelerada del poder de compra, y las fallas en los servicios públicos. La situación económica se fue

¹ Encuesta sobre Condiciones de Vida (2016), realizada por un equipo de profesionales de las universidades Simón Bolívar (USB), Central de Venezuela (UCV) y Católica Andrés Bello (UCAB).

*frenar el
deterioro de
nuestra
economía
es urgente*

El futuro de Venezuela no tiene por qué ser de mayores carencias.

Frenar el deterioro de nuestra economía es urgente. Los venezolanos, y particularmente los más humildes, ya han perdido demasiado de su bienestar. No debemos esperar a que la situación se haga aún más dolorosa para corregir el rumbo de la política económica que nos trajo a la crisis. Es momento de que las normas que rigen nuestra economía empiecen a responder de forma efectiva a los problemas de la población, y para ello, esas normas deben reorientarse hacia potenciar el uso de nuestros recursos y nuestro talento como medio para crear bienestar para las familias venezolanas. Eso significa que necesitamos recuperar la confianza en nuestras instituciones y crear espacios para la cooperación. Sobre esas bases, trabajando juntos, vamos a superar los problemas del presente y vamos a empezar a avanzar hacia la Venezuela de oportunidades que sabemos que es posible.

Nuestra voluntad de superar los problemas es sólida.

Como empresarios, estamos convencidos y bien dispuestos a hacer el esfuerzo necesario para generar empleos dignos, producir los bienes y servicios que necesita la población y sustentar el aumento permanente de nuestra calidad de vida. Estamos comprometidos con impulsar nuestro país hacia el desarrollo, y entendemos que lograrlo requiere tomar decisiones oportunas y responsables, especialmente en lo que se refiere a política económica. Ante la gravedad de la situación económica que enfrentamos, necesitamos objetivos claros, planes integrales, coordinación y acuerdos entre los diversos actores. Por eso desde Fedecámaras insistimos en proponer una agenda, una ruta posible para recuperar la confianza que es fundamental para recuperar el crecimiento de nuestra economía, y así, el bienestar de nuestra población.

Sabemos que recuperar el bienestar empieza por invertir.

Se necesita inversión para que nuestras tierras estén labradas, nuestras industrias operen al 100%, y nuestros comercios estén abiertos; también para que no nos falle el servicio de agua potable, ni la electricidad, y para que las carreteras no se llenen de huecos. Venezuela necesita abrirle las puertas a todas las fuentes de inversión: nacional, extranjera, pública y privada, considerando especialmente que el sector privado se reconoce cada vez más en el mundo como un elemento clave para la superación de los desafíos del desarrollo.

Sabemos que la actividad empresarial tiene que ser competitiva y solidaria a la vez.

los concibe la OIT. El trabajo decente “significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres².”

La política económica puede orientarse a la búsqueda de mayor productividad y eficiencia, mientras se fomenta el crecimiento de empresas social y ambientalmente responsables, capaces de crear y mantener trabajos decentes, tal como

Venezuela necesita construir las condiciones para que crezcan empresas sostenibles.

América Latina deben garantizar para el desarrollo de empresas sostenibles. La organización³ encuentra que se deben cultivar 17 condiciones para el desarrollo de empresas sostenibles en la región, que abarcan los contextos: económico, institucional, social y de medio ambiente. Los planteamientos que hace la organización reiteran la dirección de las propuestas que Fedecámaras ha estado impulsando en los últimos años, y que han quedado plasmados en nuestros documentos de *Compromiso con Venezuela*.

El fortalecimiento de la actividad económica es una herramienta poderosa para la mejora de las condiciones de vida de la población, y es por ello que la OIT ha tomado la iniciativa de identificar cuáles son las condiciones que los países de

No podemos seguir quedándonos atrás.

de empresas sostenibles, el informe de la OIT encuentra que la región tiene rezagos con respecto al mundo desarrollado. Pero Venezuela se ha quedado atrás con respecto no solo al mundo desarrollado, sino también con respecto a la región a la que pertenece. Tenemos que empezar a cerrar las brechas. Sin duda, tenemos que empezar a tomar decisiones de política económica que nos permitan definitivamente empezar a recorrer el camino hacia la recuperación y el desarrollo. Trazar esa ruta empieza por conocer cuál es la distancia que hoy nos separa de las metas que tenemos que lograr.

Evaluando el desempeño de América Latina en las 17 condiciones necesarias para el desarrollo

- 2 Más información sobre el trabajo decente en oit.org
- 3 OIT (2012) “El desafío de la promoción de Empresas Sostenibles en América Latina y el Caribe: un análisis regional comparativo”. Copia disponible en ilo.org

el entorno que necesitamos para crear empresas sostenibles

Promover empresas sostenibles abarca múltiples factores.

Crear un entorno favorable a la inversión necesita que se tomen medidas integrales. Siguiendo al enfoque general de desarrollo sostenible, las políticas deben poder balancear los objetivos de crecimiento económico, progreso social y resguardo del medioambiente. Según la OIT, crear ese entorno favorable requiere acciones en 4 contextos: económico, social, político-institucional y medioambiental. La importancia relativa de cada ámbito de acción puede variar entre países, dependiendo de sus etapas de desarrollo y sus contextos culturales o socioeconómicos. Sin embargo, son claras 17 condiciones para el desarrollo de empresas sostenibles:

- 1 *Paz y estabilidad política:* una condición previa y básica para impulsar la constitución y el crecimiento de empresas sostenibles.
- 2 *Buena gobernanza:* incluyendo la transparencia y medidas eficaces en la lucha contra la corrupción por parte de instituciones políticas, públicas y privadas.
- 3 *Diálogo social:* especialmente para la libertad sindical y de asociación, y para el derecho de negociación colectiva.
- 4 *Respeto de los DDHH universales y de las normas internacionales del trabajo:* estas normas incluyen la libertad sindical y la negociación colectiva; la abolición del trabajo infantil; el trabajo forzoso; entre otros.
- 5 *Cultura empresarial:* con base en el reconocimiento de la función clave que cumplen las empresas en el desarrollo, insiste en el apoyo (tanto público como privado) a la iniciativa empresarial.

- 6 *Política macroeconómica estable y buena gestión de la economía:* que equilibre los objetivos de crear más empleos, combatir la inflación, y prever políticas que estimulen la inversión productiva en el largo plazo.
- 7 *Comercio e integración económica sostenible:* la eficiencia en los procesos de integración económica trae consigo efectos positivos sobre el nivel de empleo.
- 8 *Entorno jurídico y reglamentario propicio:* as regulaciones bien concebidas, transparentes y responsables, son buenas para los mercados y la sociedad, pues facilitan la formalización e impulsan la competitividad.
- 9 *Estado de derecho y garantía de los derechos de propiedad:* comprende un sistema jurídico formal y eficaz que garantice que los contratos se respetan y se cumplen.
- 10 *Competencia leal:* se necesitan normas claras y estables sobre la competencia, que incluyan el respeto universal de las normas laborales y sociales y eliminar las prácticas anticompetitivas.
- 11 *Acceso a los servicios financieros:* tener acceso al crédito, al arrendamiento financiero, a los fondos de capital de riesgo, entre otros.
- 12 *Infraestructura material:* acceso seguro y asequible al agua y a la energía, y a los sectores de actividad auxiliares (como proveedores de servicios y fabricantes de maquinarias).
- 13 *Tecnologías de la información y la comunicación:* facilitar el acceso a la tecnología de banda ancha, pues es de suma importancia para los países y empresas.
- 14 *Educación, formación y aprendizaje permanente:* desarrollar fuerza de trabajo calificada y el aumento de las capacidades humanas a partir de sistemas de educación, formación y aprendizaje permanente de alta calidad.
- 15 *Justicia e inclusión social:* se requieren políticas claramente definidas con miras a la justicia, la inclusión y la igualdad de oportunidades.
- 16 *Protección social adecuada:* adoptar un modelo de seguridad social universal sostenible que proporcione acceso a servicios esenciales (salud, prestaciones de desempleo, protección de la maternidad y pensiones).
- 17 *Gestión responsable del medio ambiente:* utilizar incentivos fiscales y otras regulaciones para promover pautas de consumo y producción que sean compatibles con las exigencias del desarrollo sostenible.

Tabla 1. 17 condiciones para crear empresas sostenibles, agrupadas en 4 contextos

Contexto Económico	Contexto político / institucional	Cultura empresarial	Contexto medioambiente
Política macroeconómica acertada y estable y buena gestión de la economía	Paz y estabilidad política	Educación, formación y aprendizaje permanente	Gestión responsable del medioambiente
Entorno jurídico y reglamento propicio	Buena gobernanza	Justicia social e inclusión social	
Estado de derecho y garantía de los derechos de propiedad	Diálogo social	Protección social adecuada	
Competencia leal	Respeto derechos humanos universales y normas internacionales del trabajo		
Acceso a los servicios financieros			
Infraestructura material			
Tecnología de la información y la comunicación			

Fuente: OIT

América Latina tiene mucho que avanzar.

Para la promoción de empresas sostenibles en la región, es preciso fortalecer las instituciones y los sistemas de gobernanza que enmarcan la actividad empresarial, con el objetivo de que existan mercados sólidos y eficientes. Así, se garantiza que los recursos humanos, financieros y naturales se combinen de manera equitativa y eficiente, para incentivar la innovación y el aumento de la productividad. También se necesita establecer nuevas modalidades de cooperación entre el gobierno, las empresas y la sociedad para asegurar la calidad de vida presente y futura, y para garantizar que el empleo se potencie al máximo.

El reto de Venezuela es aún más grande.

El aumento de la pobreza, la aceleración de la inflación, el carácter crónico de la escasez, y el decaimiento de los servicios públicos, ocurren mientras el aparato productivo venezolano se va apagando por falta de insumos, por falta de repuestos, por costos tan elevados que ya no se pueden cubrir, o por marañas burocráticas demasiado difíciles de superar. Pero más allá de los problemas económicos, en nuestro país se ha ido intensificando el conflicto político y social. Para crear el entorno de confianza y cooperación que el país necesita para empezar su recuperación -promoviendo el crecimiento de empresas sostenibles-, tenemos por delante el reto de avanzar en todos los contextos: económico, social, medioambiental e institucional.

LAS BRECHAS DEL CONTEXTO ECONÓMICO

Venezuela tiene el peor desempeño macroeconómico de América Latina.

Las políticas monetarias, fiscales y cambiarias deberían resguardar el valor de nuestra moneda, y con ello el poder de compra de las familias. Las políticas macroeconómicas también deberían promover una sólida y creciente actividad económica, mejoras en la cantidad y calidad de los empleos, y en consecuencia contribuir a la

superación de problemas sociales, donde la pobreza es el más importante de los retos a superar. De igual forma, las políticas macroeconómicas deberían prestar atención al incremento de la demanda agregada como impulso al crecimiento económico. Mientras en promedio las economías de América Latina mantienen tasas positivas de crecimiento y tasas de inflación de un dígito, los venezolanos se encuentran con anaqueles vacíos y con precios que suben de una semana a la siguiente.

La economía venezolana está en medio de una larga y profunda recesión.

En su historia contemporánea, la economía venezolana nunca había caído por más de dos años consecutivos. La contracción actual del producto interno bruto acumuló 12 trimestres de caída desde el primer trimestre de 2014 hasta

el cierre de 2016, y se espera que 2017 sea un año adicional de caída. De acuerdo a los estimados del FMI⁴, desde que empezó a contraerse el PIB (en 2014) hasta el cierre de 2016, la caída acumulada fue de 26%: la más profunda de nuestra historia contemporánea. El PIB de Venezuela ha tenido el peor desempeño de América Latina cada año desde 2014, y se espera que esta tendencia continúe en 2017 (cayendo 7,4%) mientras que se proyecta un crecimiento de 1,1% para la región.

4 Para junio de 2017, los datos oficiales del BCV sobre el PIB consolidado, están disponibles hasta el cierre de 2015.

Gráfico 1. Tasa de crecimiento de la economía: Venezuela vs. América Latina



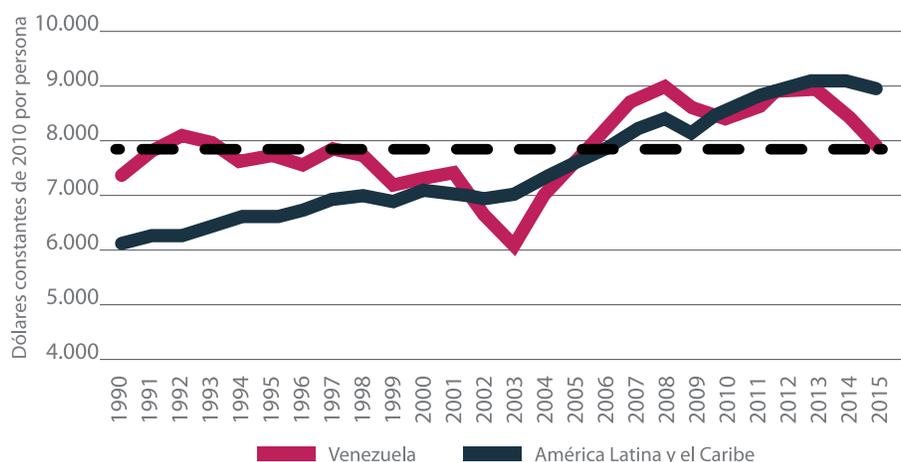
Fuente: FMI. / * Cifras estimadas

La producción por persona ha retrocedido hasta niveles que había alcanzado en los 90.

El valor de la producción que la economía venezolana pudo generar por persona al cierre de 2015, es aproximadamente el mismo valor que pudo generar en 2005, y el mismo valor que pudo generar en la década de los noventa (como se observa en el gráfico 2). Lo que se había avanzado en producción per cápita entre 2003 y 2008 -cuando esta variable alcanzó su valor máximo- se vio estancado hasta 2013 y empezó a retroceder desde el inicio del más reciente

episodio de crisis en 2014. A diferencia del comportamiento inestable de Venezuela, América Latina mantuvo una tendencia sostenida al alza. En promedio, una economía latinoamericana en 2015 pudo generar para cada uno de sus habitantes 37% más riqueza de la que generaba en 1995. En países como Panamá y República Dominicana, el producto per cápita más que se duplicó en ese lapso (creciendo un acumulado de 124% y 116% respectivamente), mientras que países como Chile, Bolivia y Colombia acumularon en esas décadas crecimientos por persona de 70%, 58% y 52% respectivamente. La economía de Venezuela en esos 20 años pudo generar solo 3% más producto para cada uno de sus habitantes.

Gráfico 2. Producto Interno Bruto per cápita, Venezuela y América Latina (en dólares constantes)

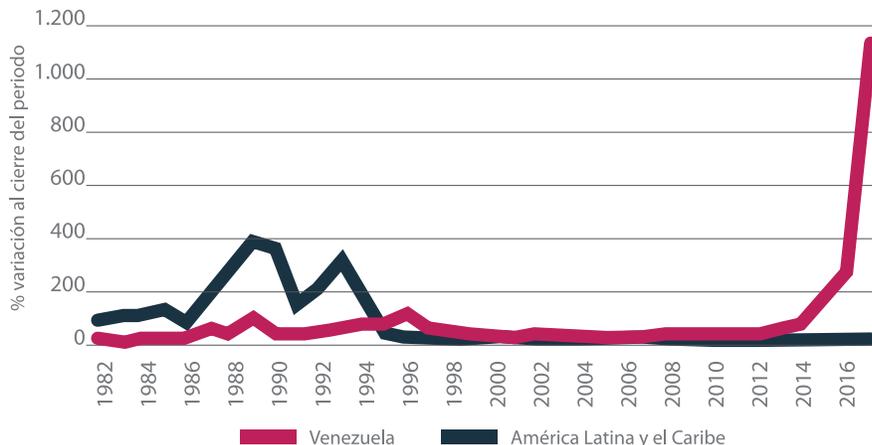


Fuente: CEPAL.

Venezuela atraviesa la mayor volatilidad de precios de su historia.

Según los datos que el país le reportó al FMI, en 2016 la inflación cerró en 274,4%: la más elevada de la historia del país hasta ahora. Cabe acotar que esta cifra es inferior a los estimados previos del organismo, que colocaban la inflación por encima de 500%. La cifra es considerablemente elevada en comparación con América Latina, que en 2016 tuvo una inflación promedio de 4,6%. La región tuvo serios problemas de inflación en los años 80 y 90 (ver gráfico 3), pero desde 1998 en adelante ha tenido inflación promedio de un dígito. Al contrario, Venezuela ha tenido inflación de 2 dígitos desde 1986, y de 3 dígitos desde 2015. El problema del alza de precios continúa en 2017, tal que el FMI estima que llegará a 1133% al cierre del año, lo cual es -por mucho- el peor estimado para el continente americano y el mundo (el segundo peor desempeño en inflación del mundo se estima para Sudán del Sur, en 120%).

Gráfico 3. Inflación de Venezuela y América Latina



Fuente: CEPAL.

Venezuela pierde participación en el comercio internacional.

Según la OIT, hay que considerar que el comercio y la integración económica generan aumentos de la eficiencia con efectos positivos en el empleo, ya sea en términos de cantidad, de calidad o de una combinación de ambos. En el ámbito del comercio internacional, hay que notar que al cierre de 2016 Venezuela acumulaba cuatro años consecutivos de reducción de las exportaciones. Más allá de la caída de los precios petroleros -que tuvo un fuerte impacto en los ingresos externos-, disminuyeron también las ventas externas de otros productos nacionales⁵. 2016 también fue el cuarto año consecutivo de recorte de las importaciones, tal que se estima que al cierre de ese año se importó un tercio de lo que se importó en 2012. Este hecho ha afectado directamente la disponibilidad tanto de insumos para la producción local, como de bienes finales. Vale acotar que la mayoría de los países de América Latina han incrementado sus exportaciones con respecto a 2012, y ninguno parece atravesar interrupciones de suministro en sus cadenas de producción a los niveles que las atraviesa Venezuela por la profunda contracción de importaciones.

Según la OIT, hay que considerar que el comercio y la integración económica generan aumentos de la eficiencia con efectos positivos en el empleo, ya sea en términos de cantidad, de calidad o de una combinación de ambos.

⁵ Según estimaciones de AVEX, las exportaciones no petroleras venezolanas en 2016 cerraron en US\$ 5.049 millones, lo que representa un incremento con respecto al año previo. Sin embargo, de ese monto, US\$ 2.918 millones (58%) corresponde a ventas de oro, principalmente a Suiza. Es decir, que las exportaciones no petroleras que más se vinculan a la producción nacional, cerraron en US\$ 2.131 millones, por debajo del monto exportado en los años anteriores.

El marco regulatorio impone más obstáculos, costos y riesgos.

De acuerdo al reporte "Doing Business 2017" del Banco Mundial, Venezuela es la peor economía de América Latina y el Caribe –y la 4ta peor del mundo- para hacer negocios. Venezuela ocupa la posición 187 entre 190 países, tal que por ejemplo, para 2017, abrir un negocio toma 230 días; obtener un permiso de construcción toma 434 días; obtener electricidad toma 208 días. Todos estos tiempos por encima de los promedios de América Latina y el Caribe. Por su parte, de acuerdo al Reporte de Competitividad Global 2016-2017, del Foro Económico Mundial, Venezuela es la economía menos competitiva de América Latina, y la 9na menos competitiva del mundo. Ocupa la posición 130 entre 138 países. Los factores percibidos como más problemáticos para la competitividad son: las regulaciones cambiarias, la inflación, la inestabilidad de la política, el crimen y el robo, la ineficiencia de la burocracia gubernamental y la corrupción.

Tabla 2. Indicadores de facilidad de hacer negocios 2017

	Venezuela		América Latina		Diferencia porcentual del tiempo que toma hacer trámites en Venezuela vs. América
	No. de Procedimientos	Tiempo	No. de Procedimientos	Tiempo	
Abrir un Negocio	20	230 días	8,3	31,6 días	630%
Obtener Permiso de Construcción	9	434 días	14,4	181,3 días	139%
Obtener Electricidad	6	208 días	5,5	66 días	215%
Pagar Impuestos	70 pagos	792 horas / año	28,9 pagos	342,6 horas / año	131%
Exportar un container (cumplimiento documental)	8 documentos	528 horas	n.d.	56 horas	843%
Importar un container (cumplimiento documental)	9 documentos	1090 horas	n.d.	83 horas	189%

Fuente: "Doing Business 2017", Banco Mundial

Falla la infraestructura que necesita la actividad económica.

La infraestructura es una de las condiciones requeridas para la competitividad. En este ámbito, de acuerdo al Reporte de Competitividad Global Venezuela ocupa la posición 121 entre 138 países, siendo el segundo país peor evaluado en infraestructura de América Latina, después de Paraguay (que ocupa la posición 122). La sostenibilidad de las empresas y el desarrollo humano dependen en parte de la calidad y cantidad de la infraestructura existente, como los sistemas de transporte, las escuelas y los hospitales, el acceso confiable al agua potable y a la energía.

Particularmente, falla el suministro eléctrico.

La energía es indispensable no solo para la vida cotidiana en los hogares, sino para las operaciones de los sectores primarios, la industria, el comercio o cualquier servicio. Según los datos del Banco Mundial (disponibles hasta 2014), en Venezuela 99,1% de

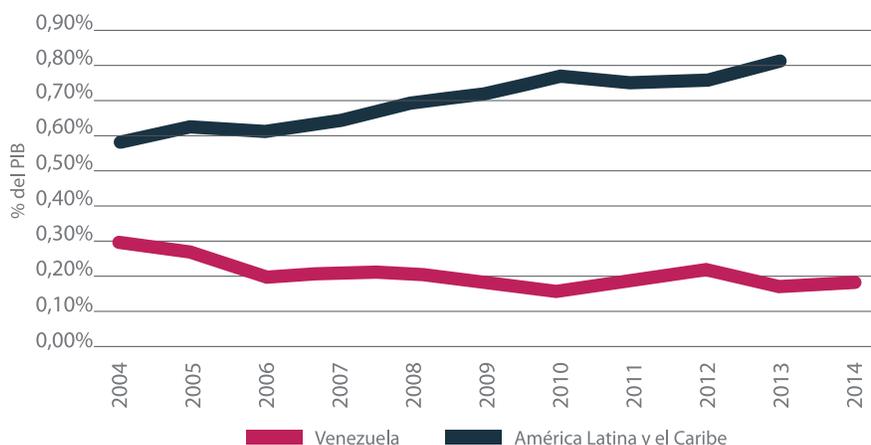
la población tiene acceso a la electricidad, por encima del promedio de los países de América Latina (97%). Venezuela consume 2.661,5 kWh per cápita, por encima del consumo promedio de América Latina (2.121,9 kWh per cápita). Sin embargo, destaca que el sistema eléctrico nacional opera en condiciones vulnerables, lo que se traduce en interrupciones frecuentes del suministro e incluso racionamientos. Esto debilita el desempeño laboral y el de las empresas. Por esto Venezuela es el país peor evaluado de América Latina en calidad del suministro eléctrico, al ocupar la posición 133 entre 138 países del mundo para este criterio en el ranking de Competitividad Global.

Hay rezagos en innovación y tecnología.

Ampliar el acceso a las nuevas tecnologías es otro desafío fundamental para un mejor desenvolvimiento de la economía. El desarrollo de la tecnología, tanto en el ámbito de la información como en el de la comunicación, es fundamental para el desarrollo

de empresas sostenibles, ya que impulsa la eficiencia en los procesos productivos, la aparición de nuevos modelos de negocio, y la producción de bienes de mayor valor agregado y sofisticación tecnológica. El comportamiento del gasto en ciencia y tecnología como porcentaje del PIB funciona como un indicador de la prioridad que se concede al desarrollo tecnológico, y en el caso de Venezuela (según datos del Banco Mundial), el gasto en innovación es relativamente bajo y además ha tenido una tendencia leve a decaer en la última década. Mientras, en América Latina la tendencia del gasto en ciencia y tecnología ha sido de aumento. Por su parte, una señal adicional de la brecha que hay entre la región y Venezuela en este ámbito, es que para 2012 (el dato disponible más reciente del Banco Mundial), 9,9% de las exportaciones de productos manufacturados en la región eran productos de alta tecnología. Esa proporción en Venezuela era de solo 1,1%. Se requiere innovación para crear mayores oportunidades para las empresas y para los trabajadores.

Gráfico 4. Gasto en ciencia y tecnología como porcentaje del PIB, Venezuela y América Latina



Fuente: Presupuestos Nacionales, BCV, Banco Mundial.

Particularmente, Venezuela está rezagada en la velocidad de internet.

Internet es el medio de comunicación del siglo. Es una herramienta fundamental para el trabajo hoy en día. Aunque ha crecido el número de usuarios de internet (alcanza 61,9% de la población del país según el reporte de Estado de la Banda Ancha en América Latina, de CEPAL), Venezuela se encuentra cada vez más atrasada en comparación con los países de la región al evaluar la velocidad de navegación. La velocidad de la banda ancha fija en el país es la más lenta de la región (1,9 Mbps, por debajo del promedio de 4,7 Mbps). La baja velocidad restringe a los venezolanos a una baja competitividad en desarrollos tecnológicos, retrasando al país en materia de comercio electrónico, educación a distancia, telemedicina, soluciones en la nube, inclusión y alfabetización. Además, se limita también el emprendimiento en esos servicios asociados a la economía del conocimiento, que pudiesen generar más ingresos a la población.

El sistema financiero debería ser un catalizador del crecimiento.

El crecimiento de un sector privado dinámico requiere facilidades de acceso al financiamiento, por ejemplo, al crédito, al arrendamiento financiero, a los fondos de capital de riesgo u otros tipos de instrumentos similares o nuevos. El financiamiento es uno de los factores que permite un proceso más incluyente de desarrollo de las empresas. De hecho, la OIT promueve que se aliente a las instituciones financieras a incluir el trabajo decente en sus prácticas crediticias. De acuerdo a los indicadores del Banco Mundial, en Venezuela la cobertura del crédito a entes privados alcanza 27,9% de los adultos, mientras que el promedio de América Latina es de 41,2%. Menos acceso al crédito no solo limita las posibilidades de emprendimiento y crecimiento de negocios, sino que puede hacer más difícil la formalización de las empresas.

Las tasas de interés no logran incentivar el ahorro.

Las decisiones de consumo, ahorro e inversión son afectadas por el comportamiento de las tasas de interés. En una economía con elevada inflación como la venezolana hoy en día, las tasas de interés en el sistema bancario no logran remunerar suficientemente el ahorro, por lo que las personas prefieren destinar sus ingresos al consumo y aumentar el endeudamiento destinado también al consumo. El sistema financiero y el mercado de capitales, además, no logran proveer muchos instrumentos adicionales que permitan a las personas ahorrar o invertir como lo necesita la economía.

El financiamiento es uno de los factores que permite un proceso más incluyente de desarrollo de las empresas

Un complejo entorno económico se traduce en menos inversiones.

En América Latina, desde el 2000 hasta 2015, la inversión extranjera directa ha representado en promedio 3,2% del PIB. En Venezuela, para el mismo periodo, la inversión ha mostrado un comportamiento volátil, que solo alcanza 1,37% el PIB en promedio. Según los datos de CEPAL, la inversión extranjera directa neta en Venezuela al cierre de 2015 fue US\$ 2.609 millones, es decir, solo 2% del monto que se invirtió en total en América Latina. La inversión en Venezuela equivale a 35% de lo recibido por Colombia (US\$ 7.515 millones), o 34% de lo recibido por Perú (US\$ 7.690 millones). Un entorno macroeconómico inestable, un marco regulatorio lleno de obstáculos, y fallas en la infraestructura fundamental para operar en el país, traen como consecuencia menos inversión. Más aún si a estos elementos se suma la creciente incertidumbre política y la fragilidad de la situación social.

Invertir se convierte en una decisión de alto riesgo.

No se trata solo de no atraer inversión extranjera: más importante es que para muchos venezolanos las grandes oportunidades quedan atrapadas debajo de los aún más grandes riesgos y amenazas. No hay certeza sobre cómo se podrán tomar decisiones de negocio elementales, como el precio de su producto, el momento de importación de un repuesto, o la posibilidad de movilizar materiales de un estado del país a otro. Además hay incertidumbre sobre la continuidad de las políticas clave, como por ejemplo el sistema cambiario, la normativa salarial o el marco impositivo. Y más grave aún, es que incluso se impone incertidumbre al derecho de propiedad, pues el gobierno tiene amplias facultades para la confiscación de productos y expropiación de activos. Este no es el entorno económico que le permite a un país crecer.

Un entorno macroeconómico inestable, un marco regulatorio lleno de obstáculos, y fallas en la infraestructura fundamental para operar en el país, traen como consecuencia menos inversión

las brechas del contexto social

La pobreza es incompatible con el desarrollo de empresas sostenibles.

Según el INE, el porcentaje de hogares en condiciones de pobreza –medida por ingresos- fue de 33,1% en el primer semestre de 2015. Esta cifra representaba un incremento relevante con respecto al año previo

(la pobreza alcanzaba 29,5% de los hogares en el primer semestre de 2014). Desde entonces no se han publicado cifras oficiales, pero las estimaciones de ENCOVI indican que la pobreza aumentó a 73% al cierre de 2015 y a 81,9% al cierre de 2016. El incremento acelerado de la pobreza es la consecuencia más dolorosa del profundo deterioro de la capacidad de compra de los salarios, en una economía contrayéndose, con serios problemas de abastecimiento y fallas en los servicios públicos. Una población en situación de pobreza tiene más dificultades para desarrollar su talento, y más dificultades para encontrar y crear oportunidades. En situación de pobreza es más difícil acceder al crédito para emprender, es más difícil ahorrar para invertir, es más difícil educarse para la máxima eficiencia en cualquier área y es más difícil cubrir las necesidades básicas de nutrición o de vivienda digna. Nada de esto es compatible con el desarrollo de empresas sostenibles. Para construir el entorno favorable que necesitamos, las políticas públicas deben apuntar hacia la justicia, la inclusión social, y la igualdad de oportunidades en el empleo.

Gráfico 5. Evolución de la pobreza en Venezuela (medida por línea de ingreso)



Fuente: INE, ENCOVI

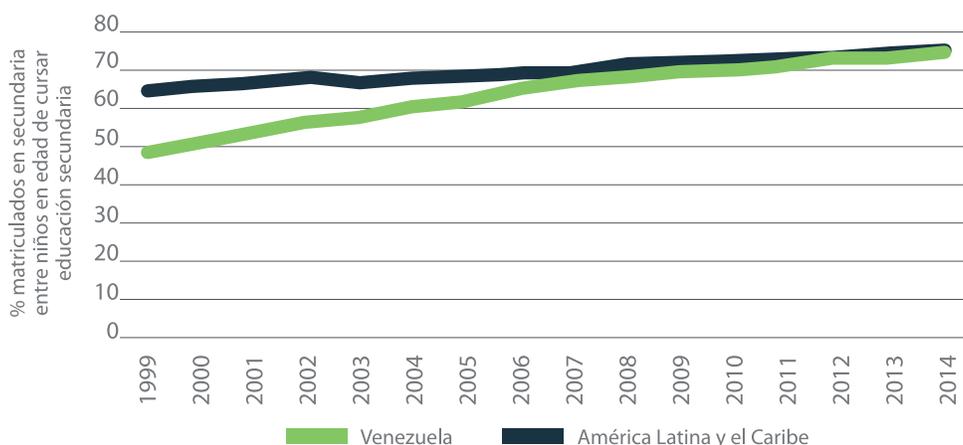
Venezuela necesita potenciar su talento humano.

La tasa de desempleo venezolana se encuentra por debajo del promedio de la región, tal que en 2016 cerró en 6,9% mientras que en América Latina se ubicó en 8,1%. No obstante, la tasa de desempleo no refleja bien los problemas de informalidad y de falta de calidad de los empleos que hay en el país (jornadas incompletas, ingresos bajos, o condiciones laborales inadecuadas). El talento es el factor productivo más importante de la economía contemporánea. Según la OIT, es importante centrarse en el desarrollo de una fuerza de trabajo calificada y en el aumento de las capacidades humanas a través de sistemas de educación, formación y aprendizaje permanente de alta calidad, para ayudar a los trabajadores a encontrar buenos empleos y a las empresas a encontrar los trabajadores calificados que necesitan. De esa manera, la sociedad podrá alcanzar el doble objetivo del éxito económico y el progreso social.

La educación es fundamental para el desarrollo económico y social.

Para 2014, de acuerdo a cifras del Banco Mundial, las tasas de inscripción en educación primaria y secundaria en Venezuela estaban solo levemente por debajo de los promedios de América Latina. En el país, la tasa de inscripción escolar neta en educación primaria era 90,6%, y en el caso de la educación secundaria 74,8%, mientras que en la región las tasas eran respectivamente 91,7% y 75,9%. Las mejoras en la cantidad de niños y jóvenes con acceso a la educación hasta 2014, parecen haber retrocedido luego con el recrudecimiento de la crisis en el país. Para 2016, según ENCOVI, 88% de los niños y adolescentes (de 3 a 17 años) asisten al colegio, pero de esos, 65% declaran faltar "algunas veces" por: fallas en el servicio de agua (30%), apagones (22%), huelgas (15%), falta de transporte (9%), falta comida en el hogar (10%), o enfermedad (4%). Venezuela necesita políticas para mejorar la calidad de su educación, y para garantizar un entorno en el que niños y jóvenes puedan desarrollar su talento y su vocación.

Gráfico 6. Inscripción escolar neta, nivel secundario



Fuente: Banco Mundial

Venezuela sufre un grave deterioro de la salud.

Un país debería estar en la capacidad de ofrecer a toda su población el acceso a un servicio de atención en salud de calidad. Pero en Venezuela los indicadores básicos sobre el estado del sistema de salud se han deteriorado, y de forma alarmante en 2016. En mortalidad materna, el mundo y América Latina disminuyen la cantidad de muertes entre 2% y 4% al año, mientras que en Venezuela, en la última década aumentó entre 12% y 15% cada año. Particularmente entre 2015 y 2016 el aumento fue de 65%: 756 mujeres embarazadas fallecieron en el año. En 2016 también aumentó de forma preocupante la mortalidad infantil (11.466 menores de 1 año fallecieron en el año, un aumento de 30% con respecto al año anterior). Además, en 2016 se registraron 240.000 casos de malaria, 76% más que en 2015. Este grave deterioro sucede mientras el país padece de serios problemas de desabastecimiento de medicamentos, materiales médico-quirúrgicos y métodos de diagnóstico. Para junio de 2017, la Federación Farmacéutica Venezolana estimaba que hay 85% de escasez de medicamentos en el país. Ninguna otra nación de la región enfrenta semejante situación de acelerado deterioro.

Grave situación de violencia e inseguridad.

Según los resultados para 2016 presentados por la Fiscalía General de la República, la tasa de homicidios en Venezuela es de 70,1 por cada 100 mil habitantes, un incremento con respecto a 1999, cuando la tasa de homicidios en era de 19 por cada 100 mil habitantes. El incremento de la violencia no solo impacta profundamente la calidad de vida, sino que afecta la producción nacional. La actividad empresarial en Venezuela, tanto en costos como en dinámica, se ve crecientemente afectada por la incidencia de delitos como el robo, el secuestro y el asesinato. La violencia criminal es un problema para muchos países de América Latina, pero Venezuela es el único país de Suramérica que ha tenido una tasa creciente de homicidios consistentemente desde 1995 (Estudio Global sobre homicidio 2013, ONU).

Fallan las políticas que deberían estar brindando protección a los venezolanos.

En definitiva, el conjunto de políticas que debería garantizar el acceso de toda la población a condiciones dignas de vida está fallando. Y esto afecta más que a cualquier grupo, a los más humildes. El sistema de protección social está dejándolos vulnerables, y el empeoramiento de la crisis perjudica notablemente sus derechos a la alimentación, salud, educación y seguridad. Responder a esta situación con políticas puntuales e inestables –como una ocasional caja con alimentos, por ejemplo- no es una protección real para los más humildes ante la crisis. Una solución real tiene objetivos claros, y acciones definidas y estables para el largo plazo.

6 Lo que revelan estas dramáticas cifras oficiales del Ministerio de Salud; por Julio Castro Méndez" (10/mayo/2017). Disponible en prodavinci.com

LAS BRECHAS DEL CONTEXTO POLÍTICO-INSTITUCIONAL

Las instituciones son el primer pilar fundamental del desarrollo.

Son éstas las que definen las normas que van a determinar el comportamiento de todos los actores en una sociedad y en una economía. Tanto el contenido de las normas, como la manera en la que se diseñan y posteriormente se aplican, influyen directa y profundamente en la manera en la que se desempeña un país. Si

bien otros países de América Latina sufren de serios problemas institucionales, tenemos que notar que los de Venezuela lucen más graves aún. El conjunto de normas que hoy constituyen nuestro marco regulatorio ha acumulado enormes distorsiones que perjudican el funcionamiento de la economía. Por un lado, las normas imponen trabas a las decisiones económicas elementales -tal que por ejemplo, una empresa no puede comprar un repuesto importado o colocar el precio de su producto, sin la autorización de un ente burocrático. Pero además, las normas también crean incertidumbre: las leyes pueden cambiar en cualquier momento, y no se aplican por igual a todos en todos los momentos. En el ranking de Competitividad Global, Venezuela ocupa la peor posición del mundo (138 entre 138 países) según su desempeño institucional.

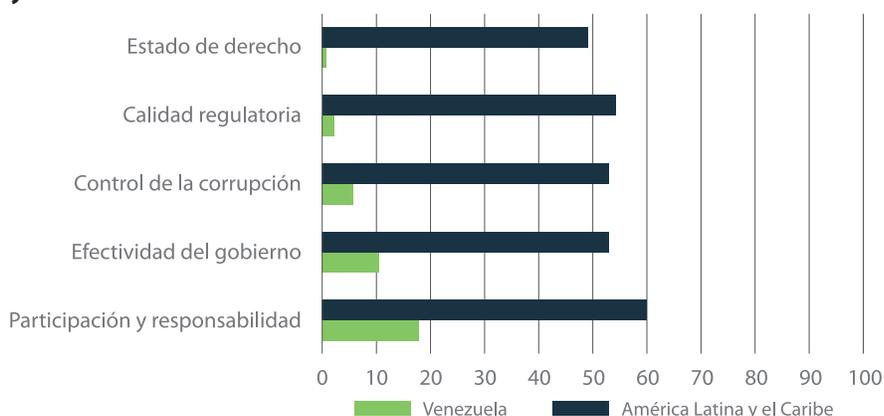
Un marco institucional débil como el que tiene hoy en día Venezuela, se convierte en obras inconclusas o programas sociales que no logran sus objetivos planteados

No hay confianza en la actuación de las instituciones públicas.

Venezuela es evaluada como el país más corrupto del mundo, caracterizado por el desvío de fondos públicos (posición 138), la ejecución de pagos irregulares y sobornos (133), y la poca confianza en los políticos (135). El país también padece por el predominio de las influencias indebidas (138), pues se percibe que el sistema judicial no actúa de forma independiente (138), y que hay favoritismo en las decisiones de los funcionarios públicos (138). Un marco institucional débil -como el que tiene hoy en día Venezuela-, se convierte no solo en obras inconclusas o programas sociales que no logran sus objetivos planteados (de acabar la pobreza o de alcanzar la soberanía alimentaria, por ejemplo, ambas metas aún por cumplir en Venezuela), sino en elevada incertidumbre para quienes podrían desear emprender y crecer en el país. Según los indicadores de gobernanza del Banco Mundial (para 2015), en Venezuela no hay confianza en el Estado de Derecho: no se confía en que en el país se respetarán las reglas y los derechos de todos por igual (ver gráfico 7).

Venezuela es evaluada como el país más corrupto del mundo, caracterizado por el desvío de fondos públicos (posición 138), la ejecución de pagos irregulares y sobornos (133), y la poca confianza en los políticos (135). El país también padece por el predominio de las influencias indebidas (138), pues se percibe que el sistema judicial no actúa de forma independiente (138), y que hay favoritismo en las decisiones de los funcionarios públicos (138). Un marco institucional débil -como el que tiene hoy en día Venezuela-, se convierte no solo en obras inconclusas o programas sociales que no logran sus objetivos planteados (de acabar la pobreza o de alcanzar la soberanía alimentaria, por ejemplo, ambas metas aún por cumplir en Venezuela), sino en elevada incertidumbre para quienes podrían desear emprender y crecer en el país. Según los indicadores de gobernanza del Banco Mundial (para 2015), en Venezuela no hay confianza en el Estado de Derecho: no se confía en que en el país se respetarán las reglas y los derechos de todos por igual (ver gráfico 7).

Gráfico 7. Indicadores de Gobernanza 2015, Venezuela y América Latina



Fuente: "World Governance Indicators", Banco Mundial.

Venezuela no implementa políticas que permitan o promuevan el desarrollo del sector privado.

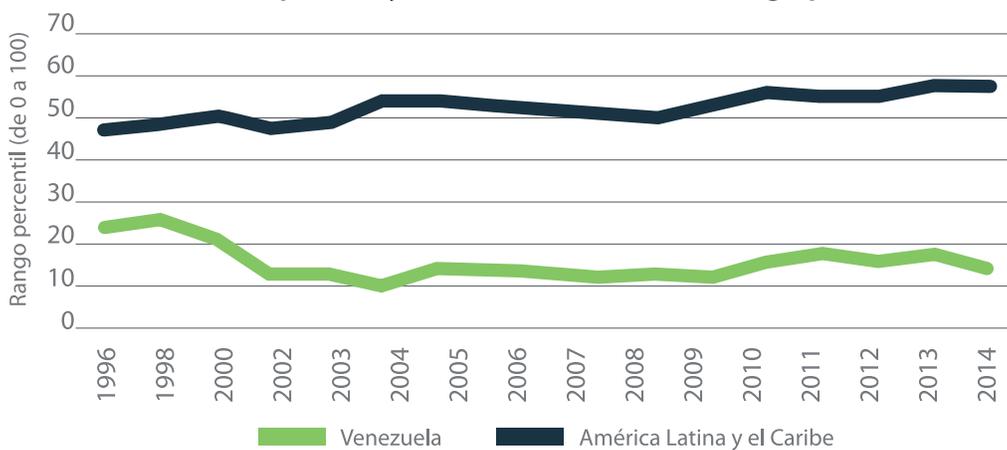
Los indicadores de gobernanza del Banco Mundial (para 2015), señalan que en Venezuela no se percibe que el gobierno tenga la habilidad de formular e implementar políticas que apoyen el desarrollo de la actividad privada, tal que el país tiene la peor calidad regulatoria de América Latina, y la sexta peor del mundo. Venezuela también está lejos de la región en efectividad del gobierno, que indica la calidad de los servicios públicos y de los servicios civiles,

el grado de independencia de las presiones políticas, y la calidad de las políticas por su formulación e implementación. Por su parte, se percibe que con respecto a América Latina, en el país faltan posibilidades de participación en la selección de autoridades, libertad de expresión y de asociación.

Promover la inversión necesita un entorno de paz y estabilidad política.

Según los indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial, en la medición de estabilidad política y ausencia de violencia, Venezuela acumula al menos dos décadas en peor situación que el promedio de América Latina (ver gráfico 8). Una economía en la que se percibe probable una situación de violencia política tiene dificultades para atraer inversiones y promover el desarrollo de empresas sostenibles. En Venezuela, el conflicto político y social se ha incrementado. El Ejecutivo Nacional, buscando aumentar su control de las actividades económicas y sociales, fue cerrando espacios de participación. Especialmente en 2017, en medio del profundo y acelerado deterioro del bienestar vivido en el país, desde el Ejecutivo no se empezaron a abrir oportunidades de diálogo social, sino lo contrario. En este sentido destaca que se desconocieron las facultades de la Asamblea Nacional -de mayoría opositora- y se ha negado o postergado la realización de elecciones abiertas (es el caso del referendo revocatorio y las elecciones regionales, por ejemplo). Desde abril de 2017, la situación se ha tornado más grave, en medio de un clima de continuas protestas⁷. Este entorno de elevada incertidumbre y de violencia, se suma al ya complejo entorno de volatilidad macroeconómica. La actual situación de inestabilidad es un enorme desincentivo a la inversión, y representa una brecha entre Venezuela y América Latina, pues ningún otro país de la región atraviesa una situación similar.

Gráfico 8. Estabilidad política y ausencia de violencia (rango percentil)⁸



Fuente: "World Governance Indicators", Banco Mundial.

- 7 Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), desde el 1 de abril y hasta el 31 de mayo se ha registraron 1.791 protestas, que se caracterizan por asistencia masiva de personas, en zonas rurales y urbanas de todos los estados del país, con exigencia de derechos políticos en combinación con derechos económicos y sociales. Hasta el 16 de junio, el OVCS registra un saldo de 94 personas fallecidas. Más información en observatoriodeconflictos.org.ve
- 8 Según el Banco Mundial, el indicador de estabilidad política y ausencia de violencia, mide las percepciones de probabilidad de inestabilidad política o de violencia por motivos políticos (incluyendo terrorismo). El rango percentil ordena los países (211 incluidos en la muestra) desde mayor estabilidad –que obtiene el valor 100- hasta mayor inestabilidad –que obtiene el valor 0-. Para 2015, el país más estable fue Groenlandia (rango percentil 100), y el más inestable fue Siria (rango percentil 0). Venezuela obtuvo un rango percentil de 13,81, mientras que América Latina promedia 58

las brechas del contexto medio-ambiental

*El compromiso con
el medioambiente es
fundamental para el
concepto de
sostenibilidad.*

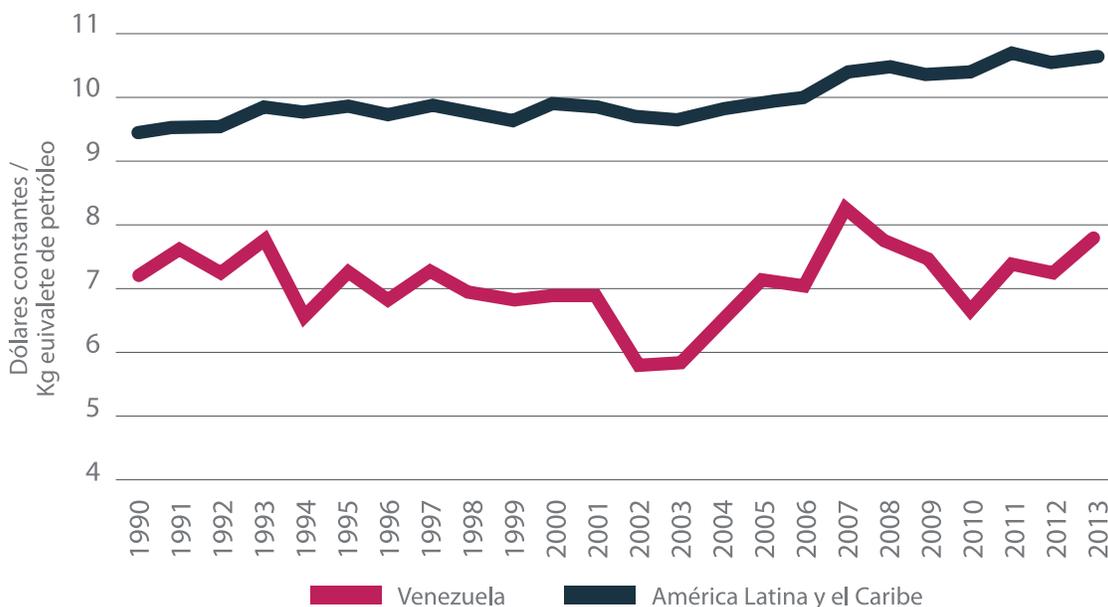
Apoyar empresas sostenibles implica plantearse claramente como objetivo la defensa de la capacidad de las generaciones futuras para también satisfacer sus necesidades. América

Latina es una región rica en recursos naturales aprovechables para la actividad económica, pero el desarrollo de esas actividades debe ser sostenible para el futuro. Venezuela, un país de abundantes recursos naturales -y especialmente el país con las mayores reservas petroleras del mundo- se enfrenta al mismo dilema de la región: cómo apoyarse en los recursos naturales para el crecimiento de la actividad económica, pero hacerlo sin atentar contra las próximas generaciones. Los países pueden construir marcos institucionales que les permitan avanzar en esa dirección, y en consecuencia promoviendo que surjan emprendimientos “verdes” (en servicios medioambientales, energías renovables y tecnologías limpias, por ejemplo) y que las empresas adapten sus procesos de producción para mejorar su gestión ambiental.

Venezuela gasta más energía para generar menos producto.

Según estadísticas del Banco Mundial (disponibles hasta 2013), por cada unidad de energía utilizada, Venezuela logra un producto de \$ 7,789, mientras que América Latina logra producir \$ 10,642. Esto indica que el país tiene camino por recorrer en cuanto a la eficiencia en el uso de la energía, sobre todo cuando se considera que Venezuela utiliza más combustibles fósiles que la región. 88% del consumo de energía en Venezuela viene de combustibles fósiles, comparado con 74% en promedio en América Latina. Aunque es lógico que en Venezuela se utilice este tipo de combustibles por la dotación de recursos del país, hay que notar que en el mundo cada vez más se busca sustituirlos por energías renovables para contribuir a la solución del cambio climático.

Gráfico 9. PIB por unidad de uso de energía
(PPA a \$ constantes de 2011 por kg de equivalente de petróleo)



Fuente: Banco Mundial.

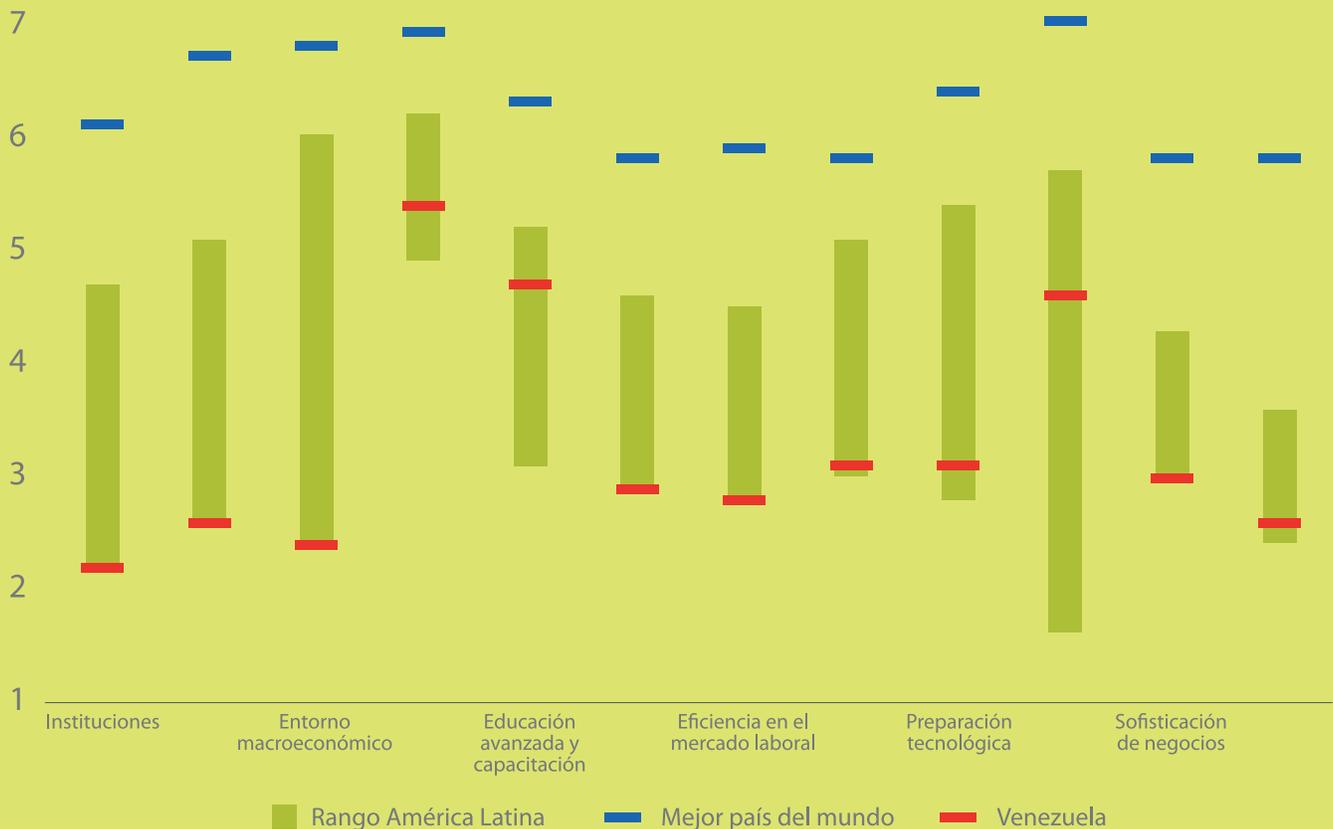
CERRAR LAS BRECHAS

Venezuela no tiene que seguir en el último lugar.

En el estudio de competitividad global del Foro Económico Mundial, se evalúa el desempeño de 138 países del mundo en 12 pilares básicos: Instituciones,

Infraestructura, Entorno macroeconómico, Salud y educación primaria, Educación avanzada y capacitación, Eficiencia en el mercado de bienes, Eficiencia en el mercado laboral, Desarrollo de los mercados financieros, Preparación tecnológica, Tamaño del mercado, Sofisticación de negocios e Innovación. En 5 de los 12 pilares, Venezuela ocupa la peor posición de América Latina. De esos, en 3 pilares (eficiencia en el mercado de bienes, eficiencia en el mercado laboral e instituciones) es además el peor del mundo (ver gráfico 10). Venezuela no tiene por qué seguir en los últimos lugares de los rankings internacionales de entorno económico, social e institucional. El país tiene recursos, talento y sobre todo voluntad para recuperarse y crecer.

Gráfico 10. Posición de Venezuela en los 12 pilares de competitividad (2017)



Fuente: "Global Competitiveness Report 2016-2017", Foro Económico Mundial.



oportunidades de acción: casos de estudio

Hay oportunidades de acción a la mano. Avanzar hacia la recuperación y el crecimiento necesita una reforma integral y profunda, planes integrales, coordinación y acuerdos entre los diversos actores. En nuestros documentos de Compromiso con Venezuela hemos esbozado un conjunto de reformas que se traduciría en la recuperación de la confianza que necesita nuestra economía para crecer con empresas sostenibles. Proponemos que se construyan políticas macroeconómicas claras y compartidas; reglas claras y justas para la actividad económica; reducción de la burocracia y simplificación de trámites; eliminación de los mecanismos de control que han empeorado, en lugar de mejorar, el bienestar de los venezolanos; provisión de infraestructura básica y servicios públicos; creación de empleo digno y protección del bienestar de los más vulnerables. Más allá de reiterar esos principios, en este documento presentamos 4 casos de acción concretos, como ejemplos de acciones que están a la mano para ser implementados de forma coordinada entre el sector público y privado. Desde el sector privado estamos dispuestos a asumir el compromiso.

CASO 1:

¿por qué exportar es tan difícil en Venezuela?

Venezuela tiene abundantes recursos naturales, talento humano, productos de calidad y una posición geográfica privilegiada. Pero cada vez son menos los productos venezolanos que logran colocarse en anaqueles de otras naciones. Las exportaciones no petroleras de Venezuela son menos de 5% de nuestras exportaciones totales, mostrando un valor de US\$ 5.066 millones⁹ en 2016 de los cuales 58% (US\$ 2.918 millones) correspondieron a ventas de oro realizadas por el gobierno nacional. Excluyendo esas ventas, las exportaciones venezolanas están en sus niveles más bajos de los últimos 20 años. En 2016 las exportaciones – sin oro ni petróleo- fueron de US\$ 2.149 millones: menos de lo que en ese año exportó Brasil solo en cereales (US\$ 4.110 millones) o Colombia solo en café (US\$ 2.462 millones).

En un país donde es difícil producir es también difícil exportar. Pero más allá de los obstáculos que enfrentan las actividades económicas en general, exportar es un desafío por el increíble conjunto de trabas que tiene un emprendedor local para colocar sus productos en el mercado internacional. De hecho, en el reporte “Doing Business 2017” Venezuela es el cuarto país del mundo con más dificultades para el comercio

transfronterizo, después de Yemen, Eritrea y la República Democrática del Congo.

Según “Doing Business 2017”, el tiempo para cumplir con los documentos solicitados para exportar desde Venezuela es de 528 horas, quedando muy rezagados respecto a la región, cuyo promedio es de 55,7 horas. En Panamá, exportar toma 6 horas en promedio y en nuestro vecino Brasil, son 18 horas. Los costos para exportar desde Venezuela son tres veces más altos que el promedio de la región, y sólo más bajos que el de algunos países de África.

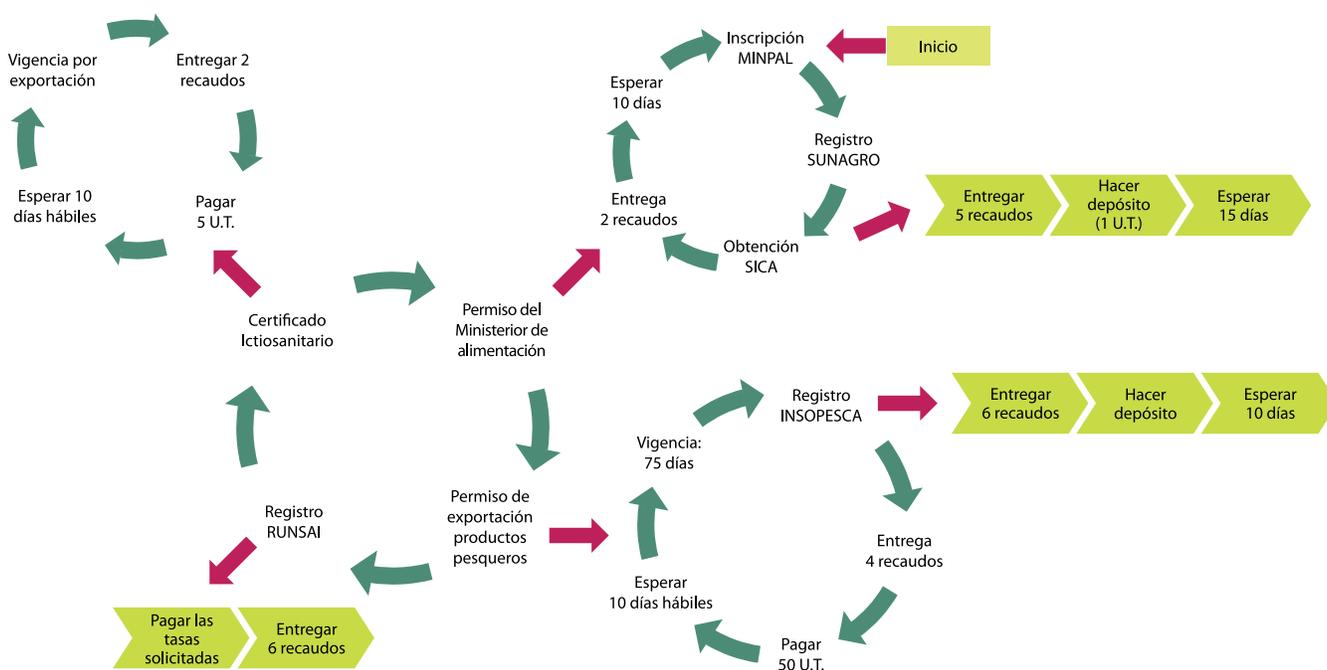
Muchos de los obstáculos están relacionados directamente con trámites que debe ejecutar una empresa que desea vender su producto en el extranjero. Estas deficiencias van desde los cambios constantes y repentinos en las reglas de juego, pasando por la excesiva burocracia y el otorgamiento discrecional de permisos, hasta el humor del perro de aduana. Son obstáculos que casi todos los países han logrado mejorar y son áreas donde la iniciativa privada puede contribuir con soluciones.

⁹ Cifras de exportaciones según las Estadísticas Internacionales de Comercio, Trade Map (ITC).

Las trabas que impone la burocracia

Suponga que usted es un productor pesquero que quiere exportar. Más allá del desafío de conseguir un comprador, lograr un producto de la calidad adecuada y operar en condiciones competitivas en el mercado internacional, el primer paso es lograr vencer la burocracia. Para poder exportar se requiere tener autorización y cumplir una cantidad de trámites que –tal como indica el Banco Mundial- toma más de 500 horas, o casi diez veces el promedio de América Latina y el Caribe.

Gráfico 11. Pasos para exportar productos pesqueros



Fuente: Elaboración propia, AVEX-Boletín N° 20.

Como punto de partida, debes clasificar tu producto según el arancel de aduanas. Para evitarse problemas, es conveniente solicitar la clasificación en el Seniat, en la sede de Plaza Venezuela, en Caracas. Antes de entregar la carpeta debes pagar una serie de tasas y las autoridades en ocasiones solicitan una muestra

del producto exportable. El horario de atención son los martes y jueves de 08:00 am a 12:00 pm. En teoría, la respuesta se produce en los siguientes 20 días hábiles, pero en realidad la emisión del documento de clasificación puede tomar dos a tres meses.

Con base en la clasificación arancelaria se conoce el régimen legal que aplica y por consiguiente los permisos que se necesitan. En el caso de un productor pesquero, para algunos productos debe obtener un permiso del Ministerio de Alimentación, lo cual requiere inscribirse en la página web de este ente y seguidamente realizar el registro en SUNAGRO para obtener el SICA (Sistema Integral de Control Agroalimentario), entregar los recaudos solicitados y esperar la respuesta. Para otros productos pesqueros solo se requiere el permiso de Exportación de Productos Pesqueros.

Una vez cumplido este ciclo se continúa con el permiso de Exportación de Productos Pesqueros, para ello se debe ir al Ministerio de Agricultura y Pesca, y registrarse en INSOPESCA. Es posible obtener las planillas a través de internet, sin embargo, la entrega de los recaudos y el depósito se deben realizar en forma presencial. En este caso existe un lapso de 10 días de espera por la respuesta de la autoridad.

Para este momento, el exportador ha entrado en 4 páginas web, ha visitado 4 oficinas públicas, ha pagado 51 unidades tributarias solo en tasas y han pasado al menos 2 meses.

Una vez obtenidos todos estos permisos entonces es momento de sacar el primer lote de exportación. Para ello se necesita una Inspección de INSOPESCA, quienes emiten un certificado ictiosanitario. Para la inspección se requiere que estén presentes el funcionario, el representante legal de la empresa y los funcionarios de resguardo. A este proceso también hay que agregar el pago de tasas y la entrega de recaudos, muchos de los cuales han sido entregados en varias ocasiones en fases anteriores. La inspección, por cierto, debe ser realizada por cada lote que se desee exportar.

La inspección final de la mercancía se puede solicitar con 15 días de antelación. En esta nueva fase participan unidades contra el narcotráfico de la Guardia Nacional, unidades de

resguardo aduanero de la Guarda Nacional y el Seniat. Para el exportador, sería muy útil que la inspección se realizara en la planta, y de hecho este procedimiento es contemplado en la Ley de Aduana y su Reglamento, tal que en 2013 se realizó un esfuerzo por rescatar esta modalidad de inspección mediante la Resolución Conjunta N° 203 Y 154 de los Ministerios del Poder Popular para la Finanzas, para la Defensa, para el Transporte Acuático y Aéreo, para la Agricultura y Tierra, para la Salud y para el Comercio¹⁰. No obstante, la inspección en planta sigue siendo realizada con mucha discrecionalidad por parte de las autoridades, procediendo en ocasiones a realizar una nueva inspección a las carga en el puerto. Es por esto que desde hace 8 años aproximadamente este proceso no se utiliza con regularidad, siendo la opción en muelle la más frecuentemente empleada. En ocasiones conduciendo a problemas de deterioro del producto exportable al romperse, por ejemplo, la cadena de frío, mediante inspecciones conducidas inapropiadamente.

Cabe señalar que los pasos descritos no incluyen los procesos que se deben realizar en aduana, como la carpeta que debe ser entregada al agente aduanal y a los funcionarios que así lo soliciten, más los documentos dependientes del mercado de destino y aquellos que son no obligatorios pero son recomendados, como los seguros.

El exportador debe entregar alrededor de 30 recaudos diferentes -y sacar en promedio 120 copias- muchos de los cuales deben presentarse continuamente ante al menos 6 entes gubernamentales que intervienen en el proceso y cuyas oficinas se encuentran casi exclusivamente en la capital del país, con un horario de atención al público bastante reducido. Esto no sería un problema grave si la tramitación

10 Resolución publicada en Gaceta Oficial N° 40.269 del 10 de octubre del 2013.

fuese virtual, sin embargo, en la práctica implica movilizaciones constantes para obtener un permiso cuyos recaudos están sujetos a cambios no notificados. Además, muchos de estos trámites son de carácter manual, lo que deja espacio para la discrecionalidad de los funcionarios, tanto para la obtención de certificados y permisos como en los momentos antes de la embarcación, específicamente en la inspección de la mercancía. Además, muchos de estos trámites son de carácter manual, lo que deja espacio para la discrecionalidad de los funcionarios, tanto para la obtención de certificados y permisos como en los momentos antes de la embarcación, específicamente en la inspección de la mercancía. Esto sin contar las dificultades que pueden producirse por los problemas de deterioro de las vías de transporte, problemas de funcionamiento de las instalaciones portuarias o las múltiples alcabalas que hay que superar para llegar desde el sitio de producción hasta el punto de embarque. Por ejemplo, actualmente la mayor parte de las exportaciones salen únicamente por Puerto Cabello y en menor proporción por la Guaira, puertos en el cual solo está llegando un buque a la semana (que toca los dos puertos) con destino a EEUU, el cual hace paradas en Cartagena, Panamá y Jamaica. Si el exportador no logra poner su carga a tiempo en este busque debe esperar una semana adicional para alcanzar el destino de exportación.

La “buena suerte” que requiere cumplir con éxito el proceso de exportación es tan aleatoria que podría depender hasta del perro de la aduana. Contaban exportadores consultados que en alguna aduana existía un solo perro de apoyo para realizar la inspección antidrogas, el cual estaba enfermo y no se alimentaba correctamente por la escasez y elevado costo de alimento apropiado para el perro, en tanto esto no era prioritario en el presupuesto de la aduana.

Es evidente que tanto las normas formales como la manera en la que son aplicadas crean una red de incentivos que limitan la exportación de

productos, al incurrir en procedimientos extensos y complejos que no dependen de la voluntad del exportador sino de una serie de variables que se escapan de su control. ¿Cómo un exportador venezolano puede prometer ser un proveedor confiable cuando muchos de sus productos requieren un “permiso de exportación”? ¿Cómo ser eficiente con tiempos de respuesta tan adversos? Una vez que se exploran las dificultades para exportar resulta claro cuáles son algunos de los factores que contribuyen a la disminución de las exportaciones. Sin embargo, también una vez conocidas las dificultades no parece tan arduo lograr un cambio radical que facilite este proceso.

Desarrollar el potencial exportador

Exportar es una gran oportunidad para las empresas venezolanas para lograr responder ante la escasez y la caída de la demanda interna, evitando el cierre de líneas de producción, creando empleos y nuevos productos. Al mismo tiempo, permite el acceso a divisas y mejora la calidad de los productos local, al promover la competitividad, la productividad y la innovación.

Productos como el cacao, el chocolate, camarones y cangrejos, son ejemplos bien conocidos de cómo empresas venezolanas pueden competir en calidad con los mejores del mundo, y han logrado posicionarse en el mercado internacional en los últimos años. Pero también destacan productos derivados de la industria química; mientras que nuestro país solía producir piezas de acero, plástico y aluminio para vehículos fabricados en otras partes de América Latina, exportaba autopartes, cemento, productos ferreteros, perfiles metálicos y tuberías. Venezuela era un proveedor de tendidos eléctricos de alta tensión de América Latina y Florida. Solíamos exportar gran variedad de calzados, de alimentos y frutas, como el arroz, melón, aguacate, piñas, limones y naranja. Todo ese potencial está contenido y

ahogado por un marco regulatorio que restringe las exportaciones.

Muchos de los obstáculos que hoy frenan el crecimiento de las exportaciones se pueden corregir de forma sencilla, con un acuerdo entre los agentes involucrados que incentive la participación en el mercado internacional y la eficiencia del proceso, para así lograr compromiso con la estabilidad de las normas y la predictibilidad de su ejecución. No se trata de evitar los controles sino de facilitar los procesos. Los objetivos de los entes gubernamentales pueden alcanzarse con soluciones modernas y con el fin último de contribuir al bienestar de todos. Algunas medidas relativamente sencillas que se pudiesen implementar:

- **Un manual único fiable para el proceso.** Actualmente no existe un único manual fiable donde se pueda obtener con detalle los pasos necesarios para el proceso de exportación. Esto implica que se debe acudir a cada organismo en particular y consultar por cada trámite. Una iniciativa que contribuiría a solucionar este problema es crear un módulo virtual donde el exportador pueda seleccionar todos los detalles de su producto y seguidamente obtener un listado de los documentos específicos necesarios así como la opción de descarga de las planillas requeridas en los diversos entes.
- **Que solo se exijan los permisos realmente necesarios, y tengan suficiente duración.** Algunos permisos de exportación son innecesarios para garantizar la eficiencia del proceso y la calidad de los bienes exportados; esos permisos podrían ser eliminados. Otros permisos, que son necesarios, actualmente tienen muy corta duración, como el permiso del Ministerio de Alimentación y el Permiso de Exportación de Productos Pesqueros. Esto crea complicaciones al momento de negociar los contratos pues se generan dudas sobre la capacidad del exportador de mantener un suministro continuo a sus clientes en

el exterior. Ayudarían a solucionar este problema extender a un año la vigencia de los permisos y no tener que esperar hasta el vencimiento para realizar la prórroga.

- **Crear una “Ventanilla única para exportaciones”.** Es posible implementar una gestión digital de la exportación que permita hacer todos los tramites en línea, reduciendo costos, procedimientos y acortando el tiempo de la operación. En casi todos los países del mundo funcionan iniciativas de este estilo, siguiendo una decisión de los Miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC), organismo del cual Venezuela es parte. Formalmente, los países deberían implementar estos mecanismos para facilitar el paso de las mercancías en frontera, y en la práctica, los países que no la implementa pierden competitividad internacional. Una ventanilla podría coordinar y centralizar todas las instituciones involucradas en trámites y procedimientos de exportación. El ingreso al sistema se encontraría disponible 24/7 desde cualquier computadora con internet. Es decir, que la información detallada de las empresas exportadoras podría entregarse una vez, y estar disponible para todos los entes reguladores involucrados en el proceso. Esto evitaría el tener que llevar continuamente los mismos documentos a diversas autoridades.
- **Un organismo efectivo de promoción de exportaciones.** También es posible apoyar a los emprendedores y productores en el proceso previo a la exportación. Diversos países se han encargado de crear bases sólidas que permitan el buen desarrollo del comercio internacional, siendo común la presencia de instituciones encargadas únicamente de promover las exportaciones de productos y servicios, como es el caso de ProChile, ProColombia y ProMéxico, quienes ofrecen herramientas a través de asesoría especializada para los potenciales inversores. Venezuela podría contar con una institución que ofrezca la información relevante sobre la economía nacional, sobre las oportunidades

en los mercados internacionales para los productos nacionales, sobre los asuntos regulatorios que rigen las exportaciones y los pasos a seguir.

La región ha comprendido cómo la apertura económica mediante el comercio internacional es vital para el progreso de su economía y, por ende del país. Es por ello que ha focalizado sus políticas en innovar y simplificar los trámites requeridos para exportar. Un ejemplo de estas iniciativas es la creación del "Sistema Integrado de Comercio Exterior" (SICEX) en Chile; esta es una ventanilla única que facilita a los usuarios la tramitación ante el Servicio Nacional de Aduanas y otros servicios públicos que forman parte del proceso de operación y permisos para realizar exportaciones. Por medio de SICEX se busca solventar dos problemas básicos (los cuales también se encuentran presentes en el caso venezolano) como la redundancia en la entrega de los documentos y el largo tiempo de espera para la aprobación de permisos por parte de las autoridades. Este sistema propone un único portal web, disponible las 24 horas los 7 días de la semana, donde se podrá tramitar solicitudes, pagar las tasas y hacer seguimiento

a tiempo real del proceso; además, las respuestas serán automáticas e inmediatas gracias al establecimiento de una red donde intervienen todos los entes públicos vinculados con la actividad de exportación. Su uso es gratuito, la tramitación tiene pleno valor legal y el usuario cuenta con un curso de capacitación, un manual y la certeza en la confidencialidad de la información suministrada.

Las soluciones a las trabas que debe enfrentar el exportador venezolano existen, y han sido adoptadas no solo por los países desarrollados, sino también por nuestros vecinos en la región. El único ingrediente que a Venezuela le hace falta para estar al nivel de sus competidores es tomar la decisión. Se necesitan confianza y determinación que guíen las iniciativas correctas y la toma de acción, entendiendo que es en nuestras manos donde recae la responsabilidad y la capacidad de eliminar los obstáculos que restringen nuestro potencial.

CASO 2:

más capacidades y mejores oportunidades para la fuerza laboral

El trabajo es el vehículo fundamental mediante el cual las personas pueden participar del crecimiento económico. Los buenos empleos, los empleos con calidad, permiten a las personas incorporarse al mercado de trabajo, ejercer la ocupación u oficio que eligieron, contar con los beneficios de la protección laboral y una experiencia positiva de crecimiento económico y personal. Sin embargo, esto es una ardua tarea en la Venezuela de hoy en día. Según los datos del INE, para abril de 2016, poco más de un millón de personas se encuentran desocupadas y más de 5 millones de personas se encuentran en sector informal de la economía. La situación es peor para las mujeres y los más jóvenes. En materia de ingresos, la prolongada recesión económica ha conducido a un incremento a la pobreza la cual según datos de ENCOVI alcanzó 81,4% en 2016.

El camino a la solución de estos problemas pasa por la recuperación y reconstrucción económica, y requiere especialmente asegurarse de que los venezolanos puedan incorporarse de forma plena al mercado laboral. Una herramienta clave en este sentido es la formación para el trabajo. Se trata de garantizar que cada persona tenga una oportunidad de adquirir las habilidades que requiere para poder incorporarse y beneficiarse de las actividades económicas.

La realidad económica global implica que se producen nuevas oportunidades económicas, lo cual requiere que los empleos se transformen para cubrir la demanda. Esta es una realidad mundial que es particularmente importante para Venezuela.

Según cifras del Banco Mundial¹⁰, 34% de las compañías en América Latina consideran que una de las trabas que enfrentan para el incremento de su productividad es la formación inadecuada de la fuerza laboral. La investigación académica¹¹ muestra la importancia del “know-how colectivo” y como su presencia influye en el aceleramiento del crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Por ello la importancia de adoptar políticas que busquen canalizar la capacidad del Estado con las necesidades de las empresas y el rol de la sociedad civil, a través de la creación de programas que incentiven la inserción laboral en mejores condiciones para la productividad.

10 Resultados de la Encuesta de Empresas del Banco Mundial. La encuesta evalúa un conjunto diverso de datos económicos, en más de 127.000 empresas en 139 países. Resultados disponibles en: <http://espanol.enterprisesurveys.org/data>

11 CAF (2014) “Educación técnica y profesional en América Latina: el reto de la productividad”. Disponible en: publicaciones.caf.com

Cooperación entre el sector público y privado

La Corporación Andina de Fomento identifica 3 modelos de capacitación utilizados en América Latina. La "institución tradicional" suele ser de carácter nacional, generalmente adscrita a los ministerios de trabajo, pero con autonomía administrativa y financiera. Algunos países que se incluyen en este modelo: Colombia, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Venezuela, Honduras, entre otros. El "Estado regulador y promotor" es el segundo tipo de iniciativa, y consiste en que el gobierno define las políticas de capacitación, las promueve y las supervisa, pero no se encarga directamente de ejecutarlas. Argentina, Chile, Uruguay y Trinidad y Tobago tienen modelos como este. Finalmente, el modelo "Mixto" combina las características y los actores de los dos modelos anteriores: el Estado asume es regulador y promotor del sistema, mientras que al mismo tiempo hay instituciones autónomas nacionales de formación profesional y capacitación laboral. Este modelo se sigue en Brasil, México, Ecuador, Perú y Paraguay.

Si bien en muchos casos en la región, las iniciativas de capacitación son del gobierno, existen casos de éxito donde son las mismas empresas privadas las que forman al personal de acuerdo a sus necesidades a través de los programas de capacitación. El ya mencionado estudio de la CAF indica que en Brasil, por ejemplo, la empresa minera Vale fundó su propia universidad encargada de educar a sus futuros operarios, técnicos especializados y gerentes en las áreas de minería, operaciones portuarias y transporte ferroviario. Otro caso, también en Brasil, es el SENAI (Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial)¹², el cual desde su fundación en 1942 ha servido como modelo de inspiración para la región al ser

el mayor complejo de educación profesional y tecnológica en América Latina y al lograr vincular a los agentes sociales claves (los sindicatos y los empresarios) con el Estado mediante una matriz de formación pertinente a los sectores estratégicos de la economía local. El SENAI es una institución privada cuya iniciativa reside en las empresas del sector industrial quienes financian el programa bajo la contribución obligatoria de un porcentaje de sus nóminas.

No existe una modalidad única para implementar programas de formación de trabajo, pero los que funcionan mejor son los que vinculan a los actores privados, el gobierno, las universidades, ONG y entidades financieras.

Colombia, por ejemplo, se ha enfocado en el área de conservación del patrimonio cultural a través de cursos de construcción, carpintería y gastronomía, como los realizados en la Fundación Escuela Taller de Bogotá¹³ donde imparten cursos centrados en la filosofía del "aprender haciendo". Referente al área agroindustria, ofrecen el programa "Jóvenes Rurales"¹⁴, donde se trabaja en conjunto con las autoridades de cada localidad para determinar la dirección del curso.

El programa "Jóvenes bicentenario"¹⁵, en Chile, es financiado y administrado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), el cual es dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Los cursos son ejecutados por los Organismos Técnicos Capacitadores (OTEC), quienes son los encargados del apoyo en la inserción laboral de los participantes. Un aspecto diferenciador de este programa es que a los beneficiarios se les paga un subsidio de alimentación y transporte, además de otorgarles un certificado al finalizar el curso. Otra de las iniciativas de política laboral del Gobierno chileno es el programa "Aprendices"¹⁶, donde

12 Más información disponible en: senai.br

13 Más información disponible en: escuelataller.org

14 Más información disponible en: oitcinterfor.org

15 Más información disponible en: oitcinterfor.org

16 SENCE (2009) "Programa Planes de Aprendizaje: Guía Operativa". Departamento de Empleo, Santiago de Chile.

mediante un contrato especial de trabajo el empleador se compromete a impartir al aprendiz las competencias laborales de su oficio. El trabajador recibe una compensación no inferior a un ingreso mínimo mensual mientras que las empresas reciben una bonificación mensual equivalente al 50% del ingreso mínimo por cada aprendiz contratado.

Brasil, además de los proyectos nombrados con anterioridad, también ofrece programas creados por la participación conjunta de sindicatos y empresarios, como lo es el programa "Esperanza y Talento", el cual se enfoca en el sector de Telemercadeo y Centro de Llamadas ejecutado por el Instituto Asociación para la Promoción de la Seguridad Eléctrica APSE y el Sindicato de Trabajadores de las Empresas de Telecomunicaciones (Sintetel). A su vez, las convocatorias para los cursos se hacen en coordinación con instituciones escolares públicas y fundaciones lo cual amplía el alcance hacia los participantes.

Otra institución que ha participado activamente es la iglesia. La Federación Internacional Fe y Alegría ha sido uno de los principales promotores de la formación del trabajo a nivel regional, tal que sus acciones resaltan en países como El Salvador, donde se ejecutan programas sociales directamente en las comunidades, y en Venezuela, a través de los Centros de Capacitación Laboral (CECAL).

Las oportunidades de formación en Venezuela

En los últimos años la productividad del país ha venido en declive debido a la inestabilidad macroeconómica, y los conflictos políticos y sociales que han perjudicado el aparato productivo nacional. Esto ha tenido una repercusión en términos de calidad de vida, y particularmente de calidad del empleo. En cuanto a calidad de la formación, ciertamente muchos profesionales venezolanos han logrado posicionarse a nivel internacional, y universidades nacionales siguen teniendo espacio entre las mejores de Latinoamérica, pero parte importante de la población se encuentra desatendida en términos de formación para el trabajo, y a pesar de las políticas implementadas por los últimos gobiernos, los resultados muestran que las políticas no se tradujeron en formación de calidad para todos.

Según el Global Competitiveness Report 2016–2017, la educación superior y entrenamiento son impulsores de la eficiencia necesaria para la competitividad. Al evaluar esta categoría, Venezuela se encuentra en la posición 53 entre 138 países, mejor que muchos países de la región incluyendo entre otros a Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Panamá. Esto se debe principalmente a los indicadores de acceso a la formación: el reporte indica que la tasa de matriculación en educación secundaria es de 91,6%, y para la educación terciaria es 77%. Esto implica que evaluando por cantidad de formación, Venezuela se ubica en la posición 20 entre 138 países. Sin embargo, cuando se evalúa no la cantidad, sino la calidad de la formación, Venezuela cae a la posición 107 entre 138 países. Otro hecho a resaltar, es que a pesar del acceso y la calidad que pueda tener la educación, Venezuela no logra mantener y atraer talento. El país ocupa la última posición del ranking (138) en este criterio, mientras que países como Chile y Panamá se encuentran entre los primeros 30 puestos en el mundo.

De acuerdo con estadísticas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)¹⁸, aproximadamente 84% de los estudiantes culmina la primaria, pero solo 25,6% culmina secundaria. Esto implica que muchos jóvenes venezolanos se incorporan a la fuerza laboral con limitadas posibilidades de acceder a formación superior y de obtener empleos de mayor calidad, con estabilidad y oportunidades de crecimiento. Esos jóvenes venezolanos se beneficiarían de obtener las habilidades y los conocimientos necesarios para integrarse en mejores condiciones al mercado laboral. El país podría contar con programas de capacitación coordinados por las comunidades y las empresas, apoyadas por los gobiernos locales. El primer paso sería reconocer los sectores estratégicos de la economía local, para seguidamente identificar aquellas deficiencias en productividad que pueden ser solventadas con un incremento de las capacidades técnicas de los trabajadores. Esto se alcanzaría mediante la alianza entre el sector público-privado y los beneficiarios.

Tomemos como ejemplo la isla de Margarita, donde se reconoce a la industria turística como un sector estratégico de su economía. Para que esta industria se desarrolle, hace falta la combinación de múltiples factores como infraestructura, servicios públicos, seguridad, entre otros. Específicamente, un factor clave sería la calidad del servicio y la atención al cliente. Las comunidades y las empresas privadas de servicios turísticos (operadores turísticos, hoteles y comercio local) se beneficiarían de la creación de un programa encargado de entrenar al personal en tres áreas básicas para el turismo: idiomas, recreación y administración, a través de cursos de corta duración que incluyan certificados y sean guiados por profesionales reconocidos que garanticen su calidad. El gobierno podría encargarse de ser el puente entre la oferta y la demanda de trabajo a través de la coordinación

y selección de los beneficiarios, mientras que el financiamiento podría provenir de una combinación de instituciones multilaterales y contribuciones del sector privado y el gobierno. Una política de esta naturaleza atiende simultáneamente la ocupación, la calidad de la mano de obra y el desarrollo del turismo como fuente de ingresos para las familias y para el país.

Un plan de acción

Para lograr que todos los venezolanos cuenten con las habilidades y conocimientos que necesitan, el sector privado puede contribuir en la construcción de un nuevo sistema de capacitación para el trabajador. Un programa que favorezca la incorporación al mercado laboral jóvenes y otros grupos que no han logrado incorporarse al trabajo formal. Este sistema puede partir de la base de las demandas laborales a nivel local –en un sistema en el que participen comunidades, gobiernos locales, gobiernos regionales y el gobierno nacional-, los talentos e intereses de los trabajadores, y las capacidades de formación e incorporación al trabajo del sector privado. En particular, se podría desarrollar un esquema que favorezca la creación de una oferta sustentable, adecuada, eficaz y costo-eficiente de formación para el trabajo. Las inversiones necesarias para financiar las actividades de formación para el trabajo pueden llevarse a cabo en un esquema mixto con contribuciones del sector público y privado orientado al financiamiento de becas-trabajo (aprendices), créditos fiscales, financiamiento y programas de formación.

De esta manera, la empresa privada podría elegir usar sus aportes en la contratación de proveedores de formación para incorporar nuevos trabajadores –o fortalecer las habilidades de los existentes- en tanto el financiamiento

18 Más información en el Centro de Información para la Mejora de los Aprendizajes (CIMA).

público puede emplearse para otorgar becas-trabajo (para facilitar la incorporación al mercado laboral de jóvenes adultos) o facilidades de financiamiento o crédito fiscal para aquellas empresas que contribuyan al mejoramiento del programa.

El financiamiento para programas de formación sería otorgado competitivamente entre las instituciones educativas que generan una oferta alineada con las demandas de empleo y muestren eficacia en los resultados. La oferta de formación puede realizarse de forma desconcentrada y competitiva, donde todas aquellas instituciones educativas que cumplan con los estándares de registro (universidades, institutos técnicos, ONGs y otros centros de formación) pueden optar por el financiamiento público-privado al lograr ser elegidos como proveedores tanto del sector privado como de la oferta pública.

Las empresas contribuyen también en establecer activamente donde están los nuevos y mejores empleos y que tipo de habilidades son requeridas en el mercado laboral, de manera de asegurar una alineación constante entre la oferta laboral y la oferta de formación.

En este esquema se puede asegurar promover una adecuada distribución a nivel regional y entre sectores económicos, siempre prestando particular atención a la realidad socio-económica de la población objetivo. El gobierno es un ente facilitador, que ayuda en la coordinación y ofrece tanto parte del financiamiento como condiciones para mantener este sistema en el tiempo. Finalmente, los trabajadores contarían con la ventaja de poder elegir entre programas de formación y primeros empleos que le permitan acceder al mercado laboral formal y oportunidades de desarrollo laboral. En este esquema es clave disminuir los costos para el trabajador, pero también que la formación sea relevante y contribuya sustantivamente al mejoramiento de la calidad del empleo.

Tabla 3. Aportes y responsabilidades para un sistema de capacitación para el trabajador

Empresas	Gobierno	Centros de formación
<ul style="list-style-type: none"> ● Identifican oportunidades de empleo e indican necesidades de formación particular. ● Mediante la figura de beca-trabajo, los jóvenes obtiene entrenamiento técnico en un régimen laboral que promueve la permanencia y crecimiento. ● Las empresas eligen sus proveedores de formación para el trabajo con base en oferta disponible y oportunidades de financiamiento por parte de instituciones gubernamentales. 	<ul style="list-style-type: none"> ● El gobierno nacional, regional y municipal, en conjunto con las comunidades, establece mecanismos de coordinación general. ● Otorga incentivos fiscales a las empresas que contraten a jóvenes que se incorporen por primera vez al mercado laboral. ● Orienta y facilita el acceso al crédito de instituciones que busquen contribuir con el aumento de la productividad de los trabajadores. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Universidades, institutos técnicos y otras instituciones educativas y otros centros de educación se postulan como proveedores de formación para el trabajo. ● El financiamiento para la formación es provisto por las contribuciones públicas y privadas. ● Los beneficiarios elegibles eligen las opciones que resulten adecuadas según sus capacidades, vocación y espacio geográfico. ● Las empresas y demandantes participan activamente sugiriendo áreas donde se requiere formación y certificación de trabajadores.

¿Cuánto costaría un programa que permitiera becar a 100 mil venezolanos por año, donde la persona trabaje en una empresa privada con una beca equivalente al salario mínimo integral y además reciba un programa de formación equivalente a seis meses de estudio en una universidad?

A modo de referencia, para abril de 2016 –último dato oficial disponible- había poco más de un millón de venezolanos desocupados (en situación de desempleo), una cifra equivalente a 7% de la Población Económicamente Activa. El 10% de los

desempleados es equivalente a 100 mil personas por año. El salario mínimo integral (salario mínimo más el bono de alimentación) es Bs. 250.531 en tanto que el costo de la matrícula semestral de una universidad privada es aproximadamente Bs. 425.000.

Otorgar una beca equivalente al salario mínimo integral e invertir en un programa de formación que tenga el costo equivalente a la matrícula semestral de una universidad para 100 mil personas por año, sería equivalente a US\$ 75 millones (a tasa DICOM).

CASO 3:

alianzas público-privadas como oportunidad de mejorar la infraestructura

Parte importante de nuestra calidad de vida depende de la infraestructura en nuestro entorno. Contar con viviendas suficientes y de calidad, agua corriente, drenajes, vías de comunicación, sistemas de transporte, puertos y aeropuertos, impacta notablemente la vida cotidiana y también la competitividad del país. Como destaca la Cámara Venezolana de la Construcción, “la sola presencia de la infraestructura no garantiza la prosperidad interna, pero con su ausencia y/o estancamiento y deterioro, no puede lograrse un crecimiento económico y social sostenido”¹⁹. En nuestro país, el desarrollo de la infraestructura es una tarea pendiente.

Según el Global Competitiveness Report, la infraestructura es uno de los pilares básicos de la competitividad. Evaluando este aspecto, Venezuela ocupa la posición 121 de un total de 138 países, siendo el segundo país con la peor infraestructura a nivel regional (sólo detrás de Paraguay que ocupa el puesto 122). Particularmente evaluando la calidad de la infraestructura general, el país ocupa el puesto 126. En cuanto a la calidad en la infraestructura de los puertos, el país ocupa la posición 119, mientras que en la calidad del suministro eléctrico ocupa la posición 133, y en el ranking de calidad de carreteras el país ocupa el número 119.

19 Cámara Venezolana de la Construcción (2016). “Construyendo la Venezuela que queremos”.

Para el sector vivienda la situación no es más favorable, ya que la construcción formal de casas en Venezuela se ha realizado sin contar con una eficiente política habitacional de Estado. Por el contrario, la edificación de viviendas ha estado determinada por medidas coyunturales que no han tenido continuidad en el tiempo, lo que ha conllevado a que la oferta habitacional presente un déficit total acumulado de 2 millones de unidades, mientras que la demanda derivada del crecimiento de la población es de 130.000 viviendas/año, aproximadamente, según cifras de la CVC.

Tanto la infraestructura pública como la vivienda están vinculadas directamente al desempeño del sector construcción. En Venezuela los resultados del sector se han deteriorado en los últimos años, tal que se ha estado contrayendo desde 2013. En 2015, último dato oficial, fue el sector que más se contrajo en la economía, cayendo 23,8%. La construcción es clave tanto por su rol en el crecimiento económico –es uno de los primeros sectores donde se ejecutan nuevas inversiones cuando hay crecimiento- como por su capacidad de generar puestos de trabajo -1.288.034 personas activas en 2015-. Sin embargo, al cierre de 2017 seguramente acumulará su quinto año seguido de caída.

Venezuela necesita emprender grandes inversiones en infraestructura. El gobierno tiene una capacidad mermada de ejecución tanto por restricciones de recursos como por la enorme demanda que tiene en otras áreas tales como seguridad, salud, educación y la protección del bienestar general del venezolano. Las Alianzas Público-Privadas (APPs) son una clara posibilidad de solución para esta problemática. Las APP podrían funcionar como un mecanismo eficiente para satisfacer las necesidades de los ciudadanos, por ser una alternativa para el financiamiento o para la gestión de la infraestructura. En diversos países las APP se han convertido en una herramienta exitosa para diseñar, construir y financiar proyectos de infraestructura pública;

las iniciativas han tenido éxito en un abanico de sectores, no sólo infraestructura productiva (vías y puertos) sino también en infraestructura social (colegios, hospitales, entre otros) y en innovación.

Una APP es un contrato a largo plazo entre un socio privado y una institución del gobierno que sirve para proveer infraestructura y servicios públicos en el cual el socio privado asume un rol importante en la administración y mitigación de los riesgos y la operación de largo plazo de proyectos. De igual forma, se caracterizan en que la relación entre el sector público y el privado sea estable y permanente en el tiempo.

Existe evidencia significativa de que los proyectos de obras públicas generan sobrecostos, dicho problema es recurrente en todo tipo de países (desarrollados y emergentes) y es una de las razones fundamentales por las cuales el sector público ha buscado nuevos métodos para la entrega de infraestructura y de servicios públicos. Entre los beneficios de las APP destacan:

- El suministro de servicios públicos puede ser potenciado gracias al aporte en experiencia, conocimientos y tecnologías por parte del sector privado.
- Contribuye a la diversificación de la economía y a la mejora de la competitividad en el país al impulsar los negocios y las industrias comprometidas en el desarrollo de los proyectos.
- Ayuda a solventar las limitaciones del sector público en beneficio de la ciudadanía.

Las APP son una opción eficiente para desarrollar proyectos y ofrecen muchos más beneficios a las entidades públicas. Sin embargo, este esquema sólo funciona para proyectos que cumplan con características específicas:

- Que los resultados puedan medir, de manera objetiva, su desempeño.
- Debe existir un mercado privado con la suficiente capacidad e interés para desarrollar el proyecto y prestar el servicio requerido.
- Dada una evaluación de riesgos de un proyecto, se debe observar que una gran parte de los mismos sean susceptibles de ser gestionados de forma más eficiente por el sector privado.
- El proyecto debe separar, de forma clara, los servicios o activos que van a ser objeto de la APP.
- El tiempo de contrato deben ser determinado en la estructuración del proyecto.

Experiencias

exitosas en América Latina y el mundo

Diversos países de América Latina (como Chile, Colombia, México y Perú) y del mundo han creado sistemas de financiamiento mixto con el objetivo de obtener mayores recursos financieros para desarrollar las infraestructuras necesarias sin caer en sobrecostos. Estas APP tuvieron gran éxito como mecanismo complementario en la inversión en infraestructura. Algunos ejemplos exitosos de los modelos de participación público – privado:

Tabla 4. Algunos casos de APPs en el mundo

Estudio	Muestra	Resultados
Reino Unido: Oficina Nacional de Auditoría	37 proyectos de infraestructura pública	Obras públicas tradicionales: 73% presentan sobrecostos y 70% han presentado demoras en su entrega APP: 22% presentan sobrecostos y 24% presentan demoras en su entrega
Reino Unido: Ministerio de Finanzas	61 proyectos de APP	12% presentaron demoras en su entrega. No se presentaron sobrecostos que fueran compensados por el socio público
Australia: Allen Consulting Group	33 proyectos de obras públicas tradicionales 21 de APP	OPT: Sobrecostos por 35,3% del valor original. APP: Sobrecostos por 11,6% en el mismo período de tiempo
Canadá: Junta de la Conferencia de Canadá	19 proyectos de APP	Reducción en los costos en 61% 90% de los proyectos fueron entregados a tiempo
México: Ministerio de Hacienda	ND	OPT: Sobrecostos por 33% del valor original APP: Sobrecostos por 18% en el mismo período de tiempo

Fuente: Guía de referencia para APP del Banco Mundial.

Las APP como alternativa para Venezuela

Hoy más que nunca se hace necesaria la participación tanto pública como privada en el país para poder rehabilitar, reconstruir y mantener lo construido en infraestructura o en sistemas sin atención rutinaria, ya que muchos requieren reposición. Esto, permitiría recobrar la gobernabilidad del sector pues la población sigue creciendo, los desafíos en materia de servicios se incrementan y se hace necesaria la revisión de estrategias de financiamiento público que permitan satisfacer las necesidades de los ciudadanos.

En este sentido, la CVC propone algunos proyectos que pueden apoyar lo antes descrito:

Tabla 5. Algunos proyectos en Venezuela que podrían ser ejecutados como APPs

Estudio	Estado	Inversión	Resultados
Ampliación del acueducto Luisa Cáceres de Arismendi. II Etapa	Sucre y Nueva Esparta	Inversión inicial: USD 250 MM Inversión a 10 años: USD 33,43 MM	Mejorar la operación de los sistemas de potabilización de aguas y disminuye la contaminación ambiental
Ampliación y desarrollo del Aeropuerto Internacional de Higuerote	Miranda	USD 49 MM	Conllevará a que la ciudad de Higuerote sea un punto de entrada para alcanzar la zona oriental del país, fomentando el turismo
Puerto de Aguas Profundas de Manicuaire	Sucre	USD 620 MM	Generará un impulso al desarrollo económico del estado
Transferencia Caracas (ETCcs)	Este y Sur de Caracas	USD 150 MM	Permite el desarrollo de proyectos para el aprovechamiento de residuos, generación de subproductos y disminución de desechos
Avenida Perimetral Norte: Tramo El Limón-La Encrucijada	Aragua	USD 698,24 M	Mejorar la viabilidad y transporte
Sistema Vial Expreso Región Lago de Valencia Tramo Sur Perimetral	Carabobo	USD 164,88 M	Mejorar la viabilidad y transporte

Fuente: Factibilidad de proyectos de infraestructura pública en Venezuela que pueden ejecutarse mediante esquemas de APP. 2015

Todos estos proyectos planteados pueden alcanzarse con el fortalecimiento y la creación de mano de obra calificada. Para ello, es necesario que las empresas que participen en estas alternativas de financiamiento mixtas evalúen la intervención de profesionales capacitados para llevar a cabo trabajos de este calibre, ya que de ello depende el desarrollo y bienestar de una nación.

CASO 4:

¿por qué el estado Sucre no es una potencia económica? restricciones y oportunidades

El estado Sucre tiene una dotación natural impresionante: playas, bosques, sabanas, deltas, aguas termales y cascadas. Ubicado al oriente del país, posee más de 700 Km. de costa marina de cristalinas aguas, parques nacionales, una gran variedad de flora y fauna que brindan al estado un potencial turístico inigualable. Más allá de sus bellezas naturales, es un estado rico en recursos para actividades económicas como la pesca y la agroindustria, destacando la producción de sal, coco, raíces, tubérculos y cacao de fama mundial. También tiene riqueza mineral, con yacimientos explotables de caliza, yeso, arcillas, areniscas, mármoles y peritoditas. En Sucre hay recursos energéticos, tanto en gas como petróleo. La posición geográfica del estado le otorga adicionalmente ventajas para el intercambio comercial con islas del Caribe.

La cantidad de recursos y oportunidades que posee Sucre es envidiable. Sin embargo, para 2013 (última información oficial disponible) era el estado con más pobreza del país: 55,2% de las personas estaban por debajo de la línea de pobreza. ¿Qué limita al estado Sucre de explotar todo su potencial?

La economía local

Con todos los atractivos naturales para el turismo, la actividad de comercio, restaurantes y hoteles, ocupa a 17,4% de los empleados. Es la tercera actividad que más genera empleo en Sucre según las estadísticas del INE (reflejadas en la tabla 6).

La segunda actividad que más genera empleo, es la agrícola, pecuaria y caza, que representa a 20,4% de la población ocupada. Según FAO, el perfil pesquero del estado (del 2005) cuenta con recursos marítimos tales como: sardina, pepitona, camarón, carite, curvina, lebranche, pargo, jurel y cangrejos. Sucre es también la base de una parte de la industria vinculada con el enlatado de estos productos para el consumo. En cuanto al sector agrícola, resalta el rubro de cacao, pero también hay potencial para el desarrollo de cultivos de café, caña de azúcar, tomate, yuca, ocumo chino, sábila, tabaco, raíces, tubérculos y diversas frutas tropicales.

Tabla 6. **Trabajadores ocupados por actividad económica**

Actividad económica	Población	%
Actividades agrícolas, pecuarias y caza	78.283	20,40
Industria manufacturera	45.367	11,82
Construcción	29.335	7,64
Comercio, restaurantes y hoteles	66.859	17,42
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	21.080	5,49
Establ. financieros, seguros, bienes inmuebles	8.742	2,28
Servicios comunales, sociales y personales	126.404	32,93
Explotación de hidrocarburos, minas y canteras	3.403	0,89
Electricidad, gas y agua	3.363	0,88
Activ. no bien especificadas y/o no declaradas	990	0,26
Totales	383.826	100

Fuente: INE.

La actividad que más genera empleo en el estado es la de servicios comunales, sociales y personales, donde se emplean 32,9% de los ocupados. Esto señala al gobierno como un importante empleador en el estado.

Otro sector que es relevante mencionar por su potencial, es el sector energético. PDVSA indica que en 2006 fue incorporada a las reservas probadas de petróleo la cuenca Carúpano, con 343 MMBls. También se ubica el campo petrolero Corocoro, con unas reservas probadas de 145 MMBls. Sin embargo, lo más llamativo es el potencial gasífero del estado: PDVSA planeaba el desarrollo industrial integral de los yacimientos de gas Costa Afuera en el país, y particularmente el desarrollo del proyecto Mariscal Sucre, con 1.200 millones de pies cúbicos diarios de gas.

En Sucre, se construiría el Complejo Industrial Gran Mariscal de Ayacucho (CIGMA), para el tratamiento y acondicionamiento del gas de costa afuera. Solo este complejo incluiría una planta petroquímica, áreas de almacenamiento,

muelles y terminales, plantas de licuefacción de gas, así como también un parque industrial.

Si bien de acuerdo a la información del INE en 2015 la tasa de desempleo se ubicó en 6,3% -lo que significa que en la entidad aproximadamente 26 mil personas se encontraban en situación de desempleo-, de los 383.826 trabajadores ocupados, 44,2% (169.717 trabajadores) están en empleos informales.

Las actividades económicas que se desarrollan en Sucre por un lado parecen estar dejando recursos naturales y talento humano sin aprovechar, y por otro, no están logrando sostener el bienestar de los habitantes del estado, a través de la generación de buenos empleos: bien remunerados, estables, seguros y con beneficios.

Las restricciones

Según datos del BCV, en 2015 el estado Sucre aportó tan solo 2,5% del PIB de la nación. La productividad del estado para ese año fue de Bs 3.442 constantes (base 1997) por trabajador ocupado en la entidad, 13,7% por debajo del promedio de la nación, que se ubicó alrededor de Bs 3.989,8 constantes por trabajador ocupado. La baja productividad es –al menos en parte– el resultado de las limitaciones que enfrenta la población económicamente activa para desarrollar su talento: 6,2% de los trabajadores son analfabetos; 33% poseen un nivel educativo de primaria; 39% cursaron hasta bachillerato; 5,1% son técnicos universitarios y 16,4% tuvieron una formación universitaria. El desempleo afecta más a los jóvenes: 11 de cada 100 jóvenes trabajadores en Sucre (entre 15 y 24 años) se encontraban desempleados en 2015.

También frena el desarrollo del estado la infraestructura deficiente. Las vías de comunicación y tránsito, que recorren los municipios y los comunican con los vecinos estados de Anzoátegui y Monagas tienen fallas. Frecuentemente hay problemas con la red de transmisión y distribución de energía eléctrica. De los tres aeropuertos (Cumaná, Carúpano y Güiría), solo el primero se encuentra en actividad; y hay cuatro puertos marítimos (dos en Cumaná, uno en Carúpano y otro en Güiría) a través de los cuales se realiza menos del 1% del total del comercio internacional del país. Sucre tiene de las más bajas penetraciones de internet en el país: según estadísticas de Conatel para el cierre de 2015, por cada 100 habitantes de 7 años o más, 35,6 eran usuarios de internet, por debajo de la media nacional de 62, y solo superando a la penetración en los estados Amazonas, Delta Amacuro y Apure.

Cumaná, una hermosa ciudad clave en la historia de Venezuela, ocupa la décimo octava posición entre las ciudades más peligrosas del mundo y la

sexta ciudad más peligrosa a nivel nacional con una tasa de 59,31 homicidios por cada 100.000 habitantes (2016). Según otro estudio, en el informe anual 2016 del observatorio Venezolano de Violencia (OVV), en la entidad ocurrieron 96 muertes violentas por cada 100.000 habitantes ubicando a Sucre como el octavo estado más violento del país. En ese mismo informe, se muestra que en 2016 la tasa de muertes por resistencia a la autoridad en el estado Sucre fue de 25,8 muertes por cada 100.000 habitantes ubicando a Sucre como el estado más violento en esta estadística dentro de la muestra presentada por la OVV. La situación de violencia dentro de la entidad sigue desmejorando, según reportes de la OVV entre enero y abril de 2017, período que registró 146 homicidios. Solo en abril el número de decesos fue de 67: la mayor cifra del año hasta ahora. Jesús Subero coordinador de OVV Sucre indica que “94,7 % de las víctimas fueron hombres, de los cuales 25,9 % eran jóvenes, entre 20 a 24 años. Todos los victimarios fueron hombres. El principal móvil del suceso fue el robo con 30,8 % de los casos, seguido por la venganza con 21,7 %. La mayoría de los sucesos se cometieron entre semana en el día, principalmente con armas de fuego, representando estas 79 % de los casos.”

En un ambiente de inseguridad, con una población con bajos niveles de educación, en una región con servicios e infraestructura deficiente y en un ambiente país poco atractivo para la inversión, no es de extrañar que el potencial de Sucre siga siendo tan solo potencial y no una fuente de prosperidad para todos sus habitantes.

Las oportunidades

Sucre necesita construir un entorno que motive el emprendimiento y la inversión. Solo así, el potencial puede convertirse en actividades económicas tangibles, capaces de sustentar el bienestar de la población del estado. Construir ese entorno requiere del trabajo conjunto del gobierno, el sector privado y las comunidades.

El primer paso es identificar claramente las prioridades. Por ejemplo, se podría determinar que es prioritario el desarrollo turístico, porque potencia la generación de empleo, viviendas, mejores salarios, mejor infraestructura, mejores servicios, mayor seguridad, más entretenimiento y cultura, y en definitiva mejor calidad de vida. Además, es una actividad que promueve la conservación de los ecosistemas, pues el atractivo turístico depende de ellos.

Desarrollar esta industria requería que el sector privado, invierta en la construcción de hoteles, posadas, comercios, restaurantes, oficinas y demás elementos necesarios para el turismo. Por su parte el Estado podría comprometerse a simplificar los procesos de formalización de empresas, pues reducir la informalidad se puede traducir en mayor calidad para los empleos del estado. Además, en conjunto con el sector privado, el Estado necesita empezar a mejorar la infraestructura de transporte (viabilidad y aeropuertos), seguridad, y servicios públicos como la electricidad, el agua corriente y la recolección de desechos sólidos. También se podrían emprender iniciativas público-privadas para la capacitación del talento humano en habilidades como idiomas, atención al público y gerencia, necesarias para el emprendimiento en el sector turismo.

Es relevante mencionar que para identificar las prioridades de desarrollo local, y para luego llevar a cabo cualquier actividad desde el sector público o privado, es fundamental contar con el

apoyo de las comunidades. Son las comunidades las que pueden identificar más claramente dónde se necesita la creación de escuelas, hospitales o industrias. Son ellas las que mejor conocen el patrimonio de su estado, las que aportan su talento para poner en marcha las iniciativas locales y las que deben resultar beneficiadas con mejor calidad de vida para el presente y para el futuro.

CONSIDERACIONES FINALES

Frenar el deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos es urgente, y es posible.

Sabemos que la compleja situación que enfrentamos no se puede abordar con medidas parciales o inconexas, y por eso necesitamos medidas integrales que cambien creíblemente la orientación de la política económica. No se pueden corregir realmente las distorsiones de nuestra economía si tomamos medidas que insistan en la misma dirección que nos condujo a la crisis actual: una dirección que privilegia el control por encima de la eficiencia, y los beneficios políticos de corto plazo en lugar de la sostenibilidad.

También sabemos que un plan integral para la economía venezolana sumaría un conjunto de acciones concretas para responder a problemas clave, y Venezuela puede recurrir a las mejores experiencias de América Latina y el mundo para atender asuntos como la reducción de trabas burocráticas, la capacitación de la fuerza laboral, la dotación de infraestructura fundamental y el diseño de planes de desarrollo local.

Los empresarios de Venezuela seguimos haciendo aportes para la discusión en el país, porque hoy más que nunca estamos comprometidos con el desarrollo de una economía fuerte, estable, productiva e innovadora, capaz de sostener el bienestar de los hogares, hoy y en el futuro.